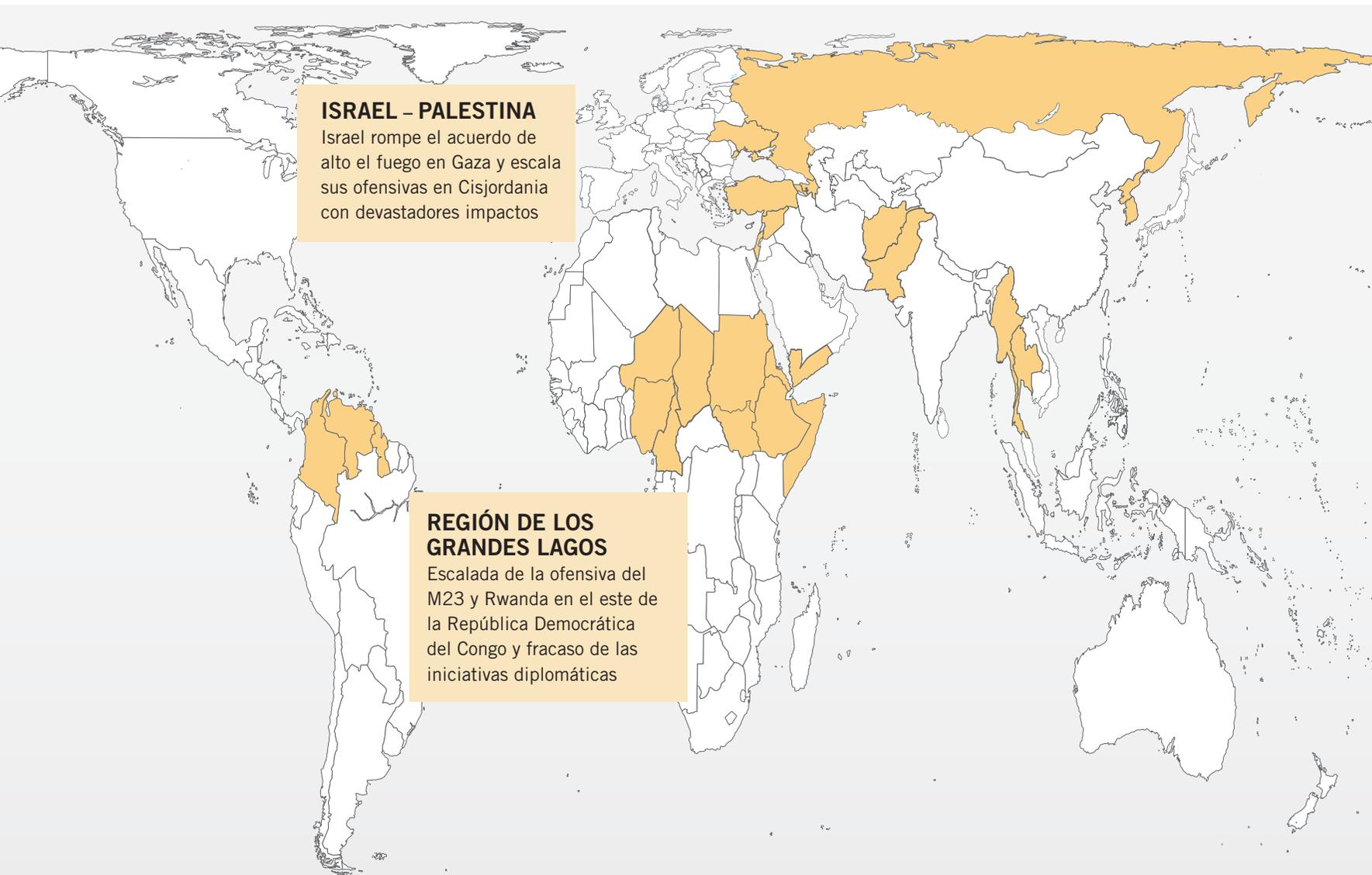


Escenarios de riesgo y oportunidades de paz

Abril de 2025

êc̃p̃ escola de cultura de pau

UAB
Universitat Autònoma de Barcelona



Otros casos analizados en esta edición:

ÁFRICA

Eritrea – Etiopía
Etiopía – Somalia
Somalia (Puntlandia)
Sudán
Sudán del Sur

AMÉRICA

Colombia
Venezuela – Guyana

ASIA Y EL PACÍFICO

Afganistán – Pakistán
Corea del Norte – Corea del Sur
Myanmar
Tailandia (Sur)

EUROPA

Armenia – Azerbaiyán
Rusia – Ucrania
Türkiye

ORIENTE MEDIO

Israel-Siria
Yemen

Con el apoyo de:

Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament

Generalitat de Catalunya

- *Escenarios de riesgo y oportunidades de paz* es una publicación
- trimestral que analiza contextos de conflicto, procesos de paz o
- cuestiones de la agenda internacional en las que confluyen dinámicas
- de riesgo o de oportunidad para la construcción de paz. Este número
- abarca el periodo entre enero y 31 de marzo de 2025.

Escenarios de riesgo y oportunidades de paz es una publicación trimestral que analiza contextos de conflicto, procesos de paz o cuestiones de la agenda internacional en las que confluyen dinámicas de riesgo o de oportunidad para la construcción de paz. Es una herramienta analítica que integra la perspectiva de género interseccional y que pretende ser un recurso útil para actores educativos y políticos y la ciudadanía en su conjunto, contribuyendo a la comprensión de estos contextos y a la acción temprana. Este número abarca el periodo entre enero y 31 de marzo de 2025.

Casos destacados:

REGIÓN DE LOS GRANDES LAGOS: Escalada de la ofensiva del M23 y Rwanda en el este de la República Democrática del Congo y fracaso de las iniciativas diplomáticas

ISRAEL-PALESTINA: Israel rompe el acuerdo de alto el fuego en Gaza y escala sus ofensivas en Cisjordania con devastadores impactos

Otros casos analizados en esta edición:

ÁFRICA

ERITREA – ETIOPÍA: Grave deterioro de las tensas relaciones entre ambos países

ETIOPÍA – SOMALIA: Se produce una mejora de la relación bilateral

SOMALIA (PUNTLANDIA): Ofensiva de los cuerpos de seguridad de Puntlandia contra Estado Islámico en Somalia

SUDÁN: El Ejército retoma el control de la capital semanas después de que las RSF declarasen el establecimiento de un gobierno paralelo en el oeste del país

SUDÁN DEL SUR: Aumenta el riesgo de reinicio de la guerra civil tras múltiples enfrentamientos armados y la detención del vicepresidente

AMÉRICA

COLOMBIA: El recrudecimiento de la violencia en el Catatumbo lleva a la suspensión de las negociaciones con el ELN

VENEZUELA – GUYANA: Se incrementa la tensión entre ambos países por la región en disputa del Esequibo

ASIA

AFGANISTÁN – PAKISTÁN: Persiste la tensión con nuevos enfrentamientos armados en la frontera

COREA DEL NORTE – COREA DEL SUR: Se incrementa la tensión bilateral y entre Corea del Norte y EEUU

MYANMAR: Un terremoto de grave magnitud asola el país en un contexto de recrudecimiento del conflicto armado

TAILANDIA (SUR): El Gobierno cuestiona que las negociaciones de paz sean la mejor estrategia para poner fin al conflicto armado en el sur del país

EUROPA

ARMENIA – AZERBAIYÁN: Ereván y Bakú pactan un acuerdo de paz, pendiente de firma y en un contexto de desconfianza y tensión

RUSIA – UCRANIA: Acuerdo de alto el fuego en el sector energético y el Mar Negro, pero persisten las hostilidades de alta intensidad

TÜRKIYE: Continúa entre obstáculos la iniciativa de paz con el PKK, pero el contexto político en el país se deteriora

ORIENTE MEDIO

ISRAEL-SIRIA: Israel intensifica sus operaciones militares y la ocupación de territorios en Siria

YEMEN: Ataques de EEUU causan decenas de muertes e indican un cambio de estrategia hacia los al-houthistas e Irán



Campo de personas desplazadas de Buhimba, Kivu Norte. Fuente: Josep Maria Royo

REGIÓN DE LOS GRANDES LAGOS

Escalada de la ofensiva del M23 y Rwanda en el este de la República Democrática del Congo y fracaso de las iniciativas diplomáticas

En las últimas semanas la ofensiva conjunta del grupo armado M23 y de Rwanda en el este de la República Democrática del Congo –iniciada a finales de 2021– ha desembocado en la toma de gran parte de la provincia de Kivu Norte y la **caída de su capital, Goma**, el 27 de enero. La ciudad, de prácticamente 2 millones de personas, se sumió en el caos con bombardeos en zonas densamente pobladas, ejecuciones extrajudiciales y la **fuga de centenares de personas presas de Musenze, la prisión de Goma**, donde más de un centenar de mujeres presas fueron violadas y quemadas por los propios reclusos, según la ONU. En las semanas siguientes la ofensiva se fue ampliando a parte de la provincia de Kivu Sur y de su capital, Bukavu, que fue ocupada el 15 de febrero, así como su aeropuerto, en Kavumu, estratégico para el despliegue de las tropas congoleñas y que estaba protegido por las tropas burundesas que le daban apoyo. El Ejército congolés, junto a sus aliados –las Fuerzas Armadas burundesas, la coalición de milicias Wazalendo, los Voluntarios de Defensa de la Patria (VDP) y las Fuerzas Democráticas de Liberación de Rwanda (FDLR), además de **mercenarios extranjeros**– se fueron retirando ante el avance del M23 y de Rwanda, abandonando a su paso gran cantidad de material militar que cayó en manos del grupo armado.

como graves vulneraciones de los derechos humanos y una catástrofe humanitaria, y ha provocado el desplazamiento forzado de centenares de miles de personas, superando los **7 millones** de personas desplazadas existentes a finales de 2024. Todas las partes en conflicto han cometido graves violaciones de los derechos humanos y la violencia sexual ha sido utilizada como arma de guerra. Tras su caída, en las dos capitales se produjo una persecución de todas las personas sospechosas de formar parte de los cuerpos de seguridad, y se multiplicaron las ejecuciones extrajudiciales, los saqueos, la conscripción forzosa de menores para sumarse a las filas del M23, y abusos de todo tipo contra la población civil en un clima de total impunidad. Por el momento los esfuerzos regionales e internacionales para alcanzar una negociación política que ponga freno a la violencia han fracasado. Los actores armados, en especial el M23 y Rwanda, han aprovechado para tomar el control de zonas ricas en recursos naturales para expoliarlos, así como del comercio a través del Lago Kivu.

¿Quién es el M23 y qué papel juega Rwanda en este conflicto?

El grupo armado M23 toma su nombre de la fecha de la firma de un acuerdo entre el antiguo movimiento político-militar CNDP y el Gobierno congolés el 23 de

marzo de 2009, por el que este grupo se comprometía a desmovilizarse a condición del reconocimiento de los derechos y la protección de la minoría a la que defiende y de la que forma parte, la comunidad tutsi banyamulenge de RDC, así como la desarticulación y repatriación – según acuerdos previos, incumplidos– de las FDLR, parte de cuyos responsables participaron **en el genocidio de Rwanda de 1994**. Acusaban al Gobierno congolés y las Fuerzas Armadas congoleñas (FARDC) de actuar en connivencia con este grupo. El M23 ya tomó el control de Goma en noviembre de 2012 para presionar a RDC, y tras una mediación de Uganda, se retiró de la ciudad, con el compromiso del Gobierno congolés de desmovilizar a las FDLR. El CNDP, a su vez, surgió de las cenizas del RCD-Goma, la insurgencia tutsi *proxy* de Rwanda que durante la segunda guerra de RDC (también conocida como la guerra mundial de África) llegó a controlar un tercio de RDC, y que se había integrado en las FARDC en los acuerdos de 2002-2003 que pusieron oficialmente fin a la segunda guerra del RDC. Las FDLR, aunque no tienen la capacidad militar de los años noventa, continúan presentes en el este de RDC y están apoyando a las FARDC y el conjunto de milicias que forman parte de la coalición Wazalendo y de VPS que han intentado, sin éxito, frenar los avances militares del M23 y de Rwanda. Este apoyo militar de las FDLR ha servido para justificar esta injerencia de Rwanda en términos de seguridad nacional, ya que las FDLR plantean la necesidad de un cambio político en Rwanda que este país no está dispuesto a aceptar. El Gobierno autoritario de Paul Kagame ha perseguido a este grupo y a todas las voces críticas con su gestión al frente del Ejecutivo rwandés. Rwanda ha negado sistemáticamente estar apoyando al M23, **aunque desde 2021 la ONU la ha acusado de apoyar militarmente al grupo** y en los últimos meses la ONU y EEUU **denunciaron la participación directa de tropas rwandesas** en territorio congolés (entre 4.000 y 7.000 soldados).

Los esfuerzos regionales e internacionales para alcanzar una negociación política que ponga freno a la violencia han fracasado hasta el momento

Fracaso de las iniciativas diplomáticas

Desde el inicio de este capítulo del conflicto a finales de 2021 –que tiene su origen en el genocidio de Rwanda de 1994 y en las posteriores guerras de finales de los años noventa– Angola, designada por la Unión Africana (UA), ha estado liderando los esfuerzos diplomáticos para alcanzar un acuerdo entre RDC y Rwanda. En diciembre Angola intentó, sin éxito, realizar el primer encuentro directo en años entre los líderes de ambos países, pero la exigencia de última hora de que **estuviera presente el M23 en el diálogo frustró la reunión**. El ministro de Exteriores rwandés señaló que la celebración de un diálogo conjunto con el M23 había estado en la agenda desde el inicio del proceso de Luanda, desmintiendo un cambio de postura de Rwanda. Desde marzo de 2024 se habían celebrado siete rondas ministeriales en Luanda para encontrar una solución a la crisis. Estas negociaciones giraban en torno a la implementación de un posible



Bukavu, capital de Kivu Sur. Fuente: Josep Maria Royo

acuerdo en el que se incluyera: 1) la neutralización de las FDLR; 2) un alto el fuego entre RDC y el M23; 3) las garantías de seguridad de Rwanda, que incluyera su retirada de RDC, junto a la posibilidad de involucrar a Rwanda en una operación militar contra las FDLR, con la supervisión de Angola. Hasta el momento ni la misión de la ONU (MONUSCO) ni las FARDC han sido capaces (y en el segundo caso tampoco ha existido voluntad política) de neutralizar a las FDLR. Por el contrario, el objetivo ha sido instrumentalizarlo en beneficio propio, armándole para utilizarlo contra Rwanda y el M23. Otras reivindicaciones del M23 entroncan con demandas de otros grupos armados congoleños, como son el regreso de los refugiados rwandeses a Rwanda, los derechos de ciudadanía de la población tutsi banyamulenge, el acceso a la tierra, el control de los recursos naturales y la falta de autoridad gubernamental en el este de RDC. Estas demandas llevaron a otros grupos locales a unirse al M23, pasando a llamarse Alianza Río Congo (AFL/M23, en francés) a finales de 2023. Cabe destacar también la responsabilidad de la propia RDC en las graves vulneraciones de los derechos humanos contra la población civil, incluida la población tutsi congoleña, lo que da alas a las reivindicaciones de Rwanda y del M23.

Tras la última fase de la ofensiva y la caída de Goma el 27 de enero, la comunidad internacional condenó los hechos y alertó de la gravedad de la situación y de la posibilidad de que la conflagración adquiriera dimensiones regionales, debido a la presencia de tropas de Rwanda, de Burundi y de Sudáfrica en el país (en el último caso, en el marco de la misión SAMIDRC), aunque las condenas no fueron acompañadas de la amenaza de sanciones. La EAC y la SADC celebraron una cumbre entre el 7 y el 8 de febrero en Tanzania en la que animaron a las partes a entablar un diálogo y se comprometieron a organizar las medidas necesarias para establecer un alto el fuego. La iniciativa de la UA liderada por el presidente de Angola, João Lourenço, consiguió finalmente que el **Gobierno congolés aceptara llevar a cabo un diálogo directo con el M23**, reunión que debía celebrarse el 18 de marzo

en Luanda. Desde el inicio de esta ofensiva, el Gobierno congolés se ha negado a reunirse con el M23. El líder del M23, Bertrand Bisimwa, anunció que habían conseguido forzar al presidente congolés a celebrar un diálogo directo, calificándolo como “la única opción civilizada para resolver la actual crisis que ha durado décadas”. Sin embargo, el M23 anunció un día antes que ya **no participaría en las conversaciones de paz**. El Gobierno congolés afirmó que asistiría igualmente a la reunión de Luanda, a pesar del desaire del M23. La retirada del M23 de las conversaciones se produjo después de que la UE impusiera sanciones a su líder y a los comandantes del Ejército rwandés. El M23 señaló que determinadas instituciones internacionales estaban trabajando deliberadamente para sabotear los esfuerzos

Qatar consiguió organizar una reunión directa entre los presidentes de RDC y Rwanda el 19 de marzo

de paz, comprometiendo el diálogo entre las partes. Tras esta decisión, entró en escena el emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, que consiguió organizar una reunión directa entre los presidentes de **RDC y Rwanda en Doha** el 19 de marzo, reunión que fue celebrada por la UA. En este sentido, la EAC y la SADC se reunieron virtualmente el 24 de marzo para acordar los **detalles de un posible alto el fuego**. No obstante, al día siguiente, Corneille Nangaa, líder de la Alianza Río Congo (AFC), coalición armada que incluye al M23, señaló que continuarían los combates a menos que se celebrara un diálogo directo en el que participara el M23 y AFC, rechazando a su vez la reunión celebrada en Doha entre los presidentes de RDC y Rwanda.



Habitantes de Gaza se preparaban para celebrar el Ramadán en medio de la devastación antes de la ruptura de la tregua por Israel. Fuente: UNRWA España.

ISRAEL – PALESTINA

Israel rompe el acuerdo de alto el fuego en Gaza y escala sus ofensivas en Cisjordania con devastadores impactos

Las frágiles perspectivas de un alto el fuego en Gaza se ven frustradas de manera radical tras la decisión de Israel de reanudar su campaña militar a gran escala sobre la Franja y romper así el acuerdo de tregua con Hamas que se había puesto en marcha en enero. Aunque Israel había lanzado diversos ataques desde el inicio del cese el fuego –que causaron la muerte de unos 150 palestinos y palestinas–, la magnitud de la violencia se intensificó a partir del 18 de marzo. En tan solo una noche los ataques aéreos israelíes provocaron la muerte a más de 400 personas, incluyendo al menos 170 niños y niñas. El Gobierno de Benjamin Netanyahu advirtió entonces que esta ofensiva era “**solo el principio**” de una nueva campaña armada sobre Gaza, que en los días siguientes ha agravado el escenario de destrucción y muerte en la Franja. Desde el 18 de marzo y hasta finales de mes habían muerto más de mil palestinos y palestinas en Gaza.

La cifra de víctimas mortales palestinas en Gaza desde octubre de 2023 superaba ya las 50.000, según los datos de OCHA –aunque diversas fuentes indican que el balance podría ser muy superior– y la violencia había provocado nuevos desplazamientos forzados que afectaban a más de 140.000 personas. Israel también reanudó sus operaciones terrestres y movilizó tropas a lo

largo del corredor de Netzarim (que separa el norte y sur del territorio) y a otras zonas de Gaza, amenazando con **anexar de manera permanente** estas áreas.

En paralelo, la situación en Cisjordania también se deterioró significativamente. Dos días después del inicio del alto el fuego en Gaza, Israel escaló sus ofensivas militares en este territorio a un nivel no visto en décadas. Sus acciones –que por primera vez desde la Segunda Intifada (2002) incluyeron el envío de tanques a Jenin y que afectaron especialmente a campos de refugiados en esta y otras localidades como Tulkarem, Nur Shams y al-Faraa– habían provocado la muerte de más de 70 palestinos hasta finales de marzo. Utilizando tácticas similares a las desplegadas en Gaza, las fuerzas israelíes destruyeron edificios residenciales e infraestructuras civiles –incluyendo sistemas sanitarios y de agua– y obligaron a más de 40.000 personas a abandonar sus hogares, en el mayor desplazamiento forzado en Cisjordania desde 1967. Las autoridades israelíes anunciaron que **sus tropas permanecerían en estas zona al menos por un año**, reforzando los análisis que apuntan a que el Gobierno de **Israel parece cada vez más determinado a avanzar en la anexión de Cisjordania**. La escalada de violencia israelí en Gaza y Cisjordania echó así por tierra las

tímidas expectativas generadas al principio del trimestre con el anuncio de alto el fuego y abrió un escenario de mayor incertidumbre, en un contexto caracterizado por la incapacidad, falta de reacción y de voluntad política internacional para frenar la violencia y el genocidio contra la población palestina y abordar con urgencia sus dramáticas necesidades humanitarias y para detener las políticas de hechos consumados y vulneraciones del derecho internacional de Israel.



Personal de la ONU inspecciona los datos en el Complejo Médico Naser, en Khan Yunis (Gaza). Fuente: OCHA oPt.

Un pacto fallido

El acuerdo de alto el fuego alcanzado a principios de año tras la mediación de Qatar, Egipto y EEUU, y que entró en vigor el 19 de enero, estaba estructurado en tres fases. La primera de ellas, de 42 días de duración, contemplaba el intercambio de israelíes retenidos por Hamas en Gaza por palestinos detenidos por Israel, un significativo incremento en el acceso de ayuda humanitaria a la Franja y el repliegue de las fuerzas israelíes de las áreas más pobladas de Gaza. En este contexto, Hamas liberó a 33 israelíes (y a cinco tailandeses) que mantenía en su poder, mientras que Israel excarceló a unos 2.000 palestinos y palestinas. Los términos del acuerdo parecían mantenerse a pesar de déficits en la implementación – incluyendo los sucesivos ataques israelíes en Gaza– y las acusaciones cruzadas. Hamas denunció que Israel no estaba permitiendo el nivel de ayuda humanitaria necesario y que continuaba bloqueando el acceso de bienes esenciales. Israel, en tanto, cuestionó la puesta en escena de Hamas en las ceremonias de entrega de los rehenes y presionó para su suspensión. Con el transcurso de las semanas, sin embargo, se hizo evidente que el Gobierno israelí no estaba dispuesto a avanzar a la segunda fase.

Según el cronograma acordado en enero, las negociaciones sobre los detalles de la segunda etapa –que debía conducir al establecimiento de un alto el fuego permanente, al retiro total de Israel de Gaza y a nuevos intercambios de rehenes por prisioneros– tenían que iniciarse en el día 16 de la primera fase, es decir, a principios de febrero. No obstante, Israel retrasó el inicio de estas conversaciones y la primera etapa expiró el 1 de marzo sin que hubiera un acuerdo. Adicionalmente, y en contra de lo previsto en el pacto de enero, Israel anunció que no se retiraría del corredor Philadelphi, una estratégica franja que separa Gaza de Egipto. En este contexto, el 2 de marzo Netanyahu planteó la negociación en nuevos términos: Hamas debía entregar a todos los rehenes que mantenía en su poder (59), pero no a cambio de un alto el fuego permanente –como estipulaba el acuerdo de enero– sino solo como una vía para extender la primera fase del pacto. El primer ministro israelí presentó la propuesta como la **adhesión a una idea del enviado especial de EEUU para Oriente Medio, Steve Witkoff**, y denunció a Hamas por rechazar la iniciativa.

La ofensiva israelí que rompió el alto el fuego en Gaza causó la muerte a un millar de personas en tan solo dos semanas y elevó a más de 50.000 la cifra de palestinos y palestinas muertos por los ataques de Israel desde octubre de 2023

El Gobierno israelí anunció entonces la suspensión de la entrada de ayuda humanitaria a Gaza para presionar a Hamas y días más tarde ordenó cortar el suministro de electricidad a la Franja. El grupo islamista palestino consideró estas acciones como un chantaje y calificó la propuesta auspiciada por EEUU como una vulneración del acuerdo de enero. Pese a ello, según trascendió, se barajaron algunas fórmulas –EEUU habría propuesto la liberación de 14 rehenes a cambio de la extensión de la primera fase del alto el fuego, Hamas habría sugerido liberar cinco como un paso conducente a la segunda fase–, que no prosperaron. Netanyahu acusó a Hamas de rechazar las ofertas de EEUU, reiteró su intención de incrementar la presión sobre el grupo palestino por la vía militar y justificó así el reinicio de su campaña en Gaza.

Las razones tras la nueva ofensiva

Aunque el Gobierno israelí ha intentado presentar la nueva coyuntura como resultado de la posición de Hamas, algunos **análisis coinciden en señalar que el grupo palestino mantuvo su adhesión a los preceptos del acuerdo de enero e identifican diversas motivaciones tras la decisión de Netanyahu de reanudar la ofensiva en Gaza**. Unas razones que explicarían el momento, más que el fondo, de la decisión del primer ministro israelí –que desde octubre de 2023 ha reiterado una y otra vez su intención de “erradicar” a Hamas y de no comprometerse más allá de una pausa en las hostilidades. Citando informes oficiales y fuentes de seguridad, informaciones de prensa han subrayado que el Gobierno israelí desea desplegar una estrategia militar aún más agresiva para convertir a Gaza en ingobernable y afectar las capacidades civiles de Hamas para mantener su autoridad en la Franja. Otras lecturas apuntan a que el fin del alto el fuego está más vinculado a razones políticas que militares, sobre todo relacionadas con el interés de Netanyahu en eludir los procesos por corrupción en su contra y las presiones para investigar los errores que habrían impedido prevenir los ataques de Hamas el 7 de octubre de 2023. El gobierno de Netanyahu estaba en una posición de mayor debilidad desde que en enero el partido ultranacionalista de Itamar

Ben Gvir abandonó la coalición en protesta por el acuerdo de cese el fuego. Si a finales de marzo Netanyahu no conseguía aprobar los presupuestos, el gobierno debía disolverse y convocar a elecciones. Tras la reanudación de la ofensiva en Gaza y la ruptura del alto el fuego, Ben Gvir anunció su reincorporación a la coalición gubernamental.

A diferencia de principios del trimestre, cuando parecía que EEUU había forzado a Netanyahu a suscribir el acuerdo de alto el fuego, ahora el Gobierno israelí cuenta de nuevo con el apoyo explícito de Washington para reactivar los ataques sobre Gaza y mantener una estrategia de línea dura. La reanudación de la ofensiva el 18 de marzo contó con la luz verde de la Casa Blanca –así lo ha subrayado Israel y ha confirmado EEUU– y la acción estuvo precedida por amenazas del propio Trump a Hamas si no liberaba a la totalidad de los rehenes. EEUU no solo parece haberse alineado con la estrategia de “máxima presión” de Israel a pesar de que va en contra del acuerdo que el propio Washington ayudó a gestar en enero. Trump también ha ido más allá en sus propuestas sobre el futuro de Gaza.

El plan árabe como alternativa a la Riviera de Trump

En febrero, durante una visita de Netanyahu a la Casa Blanca, el mandatario estadounidense planteó abiertamente la posibilidad de expulsar a toda la población de la Franja a Jordania y Egipto y de que EEUU asumiera el control de Gaza para convertirla en la **Riviera de Oriente Medio**. A pesar del revuelo y la indignación que causaron sus declaraciones, por implicar la deportación forzada de más de dos millones de personas –voces como la de la relatora especial de la ONU **Francesca Albanese lo denunciaron como la incitación a la comisión de un crimen internacional**– EEUU e Israel han persistido en esta idea. Ambos gobiernos se han aproximado (sin éxito) a Sudán, Somalia y Somalilandia para intentar que reciban a la población palestina ante la negativa de Jordania, Egipto y otros países árabes. Autoridades israelíes intentan presentar el desplazamiento forzado de población palestina como una emigración “voluntaria”, pese a la imposibilidad de aplicar ese término ante las condiciones de violencia y destrucción de la Franja.

Ante este escenario, los países árabes intentaron presentar una contrapropuesta a la iniciativa de Trump. A principios de marzo, la Liga Árabe asumió una **propuesta diseñada por Egipto** y dio a conocer un plan que tiene como punto de partida el rechazo al desplazamiento de población palestina. La iniciativa se focaliza en la reconstrucción física de Gaza como vía para avanzar a la solución de dos Estados, que reconoce como la única salida posible, y plantea que la Franja sea administrada temporalmente por

un comité de tecnócratas bajo el paraguas del gobierno palestino. El plan árabe, **que también identifica tres fases** y compromete 53.000 millones de dólares (ha sido bautizado por algunos analistas como un Plan Marshall para Gaza) recibió el apoyo de países como Alemania, China, Francia, Italia y Reino Unido y la Organización para la Conferencia Islámica, entre otros actores. La UE –que en febrero **renovó su acuerdo de asociación económica preferencial con Israel** a pesar de la cláusula que condiciona el pacto al respeto a los derechos humanos–, valoró el plan árabe como **una base seria** para discusiones sobre el futuro de Gaza.

Perspectivas a corto plazo

A finales de marzo, sin embargo, las negociaciones no estaban centradas en el largo plazo. Los contactos facilitados por Qatar y Egipto parecían estar enfocados en intentar un alto el fuego temporal. Según informaciones de prensa, **Hamas habría ofrecido liberar cinco de los rehenes que permanecen con vida a cambio de un alto el fuego de 50 días** (se estima que 24 de los 58 cautivos por Hamas aún están vivos). Los detalles de las últimas negociaciones seguían bajo secreto, pero trascendió que el Gobierno de Netanyahu estaría insistiendo en la liberación de 10 rehenes. El primer ministro israelí ha sido objeto de críticas por parte de los familiares de los cautivos en Gaza por no priorizar su liberación y, tras la reanudación de la campaña militar en Gaza, se han producido **manifestaciones en Israel contra Netanyahu y para exigir un acuerdo con Hamas**. A finales de marzo, en la Franja también se produjeron **inusuales protestas contra el grupo** islamista y a favor de que se adopten medidas para poner fin a la violencia. Paralelamente, organizaciones humanitarias y agencias de la ONU advertían sobre las gravísimas consecuencias de la reanudación de la violencia, el bloqueo y las reiteradas vulneraciones al derecho internacional humanitario. Entre ellas, los impactos de los ataques indiscriminados y deliberados contra civiles y en especial del infanticidio en Gaza –322 niños y niñas habían muerto entre el 18 y el 25 de marzo–, la alarma por el **nuevo riesgo de hambruna ante el stock limitado de alimentos** que enfrentan cientos de miles de personas en Gaza, y los renovados ataques contra instalaciones hospitalarias y personal médico y de asistencia humanitaria. La agencia de la ONU para las Personas Refugiadas Palestinas (UNRWA) –cuya ilegalización por Israel se hizo efectiva en enero, impidiendo el despliegue de una labor indispensable para la entrega de ayuda humanitaria a la población palestina– volvió a sufrir ataques directos. En marzo se anunció la muerte de otros cinco de sus trabajadores, elevando así a 284 el número de muertes de miembros de su staff por ataques de Israel desde octubre de 2023.

ÁFRICA

ERITREA – ETIOPÍA: Grave deterioro de las tensas relaciones entre ambos países

ETIOPÍA – SOMALIA: Se produce una mejora de la relación bilateral

SOMALIA (PUNTLANDIA): Ofensiva de los cuerpos de seguridad de Puntlandia contra Estado Islámico en Somalia

SUDÁN: El Ejército retoma el control de la capital semanas después de que las RSF declarasen el establecimiento de un gobierno paralelo en el oeste del país

SUDÁN DEL SUR: Aumenta el riesgo de reinicio de la guerra civil tras múltiples enfrentamientos armados y la detención del vicepresidente

ERITREA – ETIOPÍA

Grave deterioro de las tensas relaciones entre ambos países

Siete años después de la firma de un histórico acuerdo de paz entre Etiopía y Eritrea, las relaciones entre ambos países se han deteriorado paulatinamente en los últimos meses, lo que ha suscitado temores de una nueva guerra, según [han destacado diferentes análisis](#). [International Crisis Group \(ICG\)](#) ha señalado que esta crisis se relaciona en parte con la agitación política en la región más septentrional de Etiopía, Tigré, donde [Addis Abeba y Asmara se han alineado con diferentes facciones](#) del gobernante Frente de Liberación del Pueblo de Tigray (TPLF) tras un conflicto armado que causó centenares de miles de víctimas mortales, según el [Uppsala Conflict Data Program](#). El ex presidente de Etiopía, Mulatu Teshome, cercano al primer ministro Abiy Ahmed, sugirió en febrero que [Eritrea estaba fomentando la división y la guerra](#), al señalar que el presidente eritreo estaba uniendo fuerzas con la facción del TPLF liderada por Debretsion Gebremichael con el objetivo de desestabilizar la región de Tigré y Etiopía en su conjunto.

La implementación del acuerdo de paz alcanzado entre Eritrea y Etiopía en 2018 –que puso fin a una disputa de más de 20 años que incluso les enfrentó militarmente a finales de los años 2000– siguió totalmente bloqueado. El acuerdo de paz entre el Gobierno etíope y las autoridades político-militares de la región de Tigré implicaba, entre otras cuestiones, la retirada de las tropas de Eritrea (aliadas de las tropas etíopes durante la guerra en Tigré) de esta región etíope, y que no se completó durante el año 2024. La crisis del proceso de paz entre ambos países ya se evidenció a principios de septiembre con el cierre de la línea aérea que conectaba las capitales Asmara y Addis Abeba. La apertura de esta línea de la compañía Ethiopian Airlines (EA), en 2018 tras la firma del acuerdo de paz y la primera línea comercial que conectaba Eritrea y Etiopía en 20 años, había sido vista en su momento como uno de los ejemplos que evidenciaban el inicio del proceso de reconciliación. En julio el Gobierno eritreo anunció que no permitiría que esta compañía operara en Eritrea en los próximos meses, y EA decidió suspender la línea el 3 de septiembre aduciendo “condiciones operativas difíciles” ajenas a su voluntad.

Otra cuestión que se encuentra en la génesis de esta tensión es el intento de Etiopía de recuperar el acceso al Mar Rojo, que perdió cuando Eritrea obtuvo su

independencia en 1993, mediante la adquisición forzosa de territorio eritreo. En este sentido, a finales de marzo [el primer ministro etíope afirmó que su país no buscaría un conflicto con Eritrea](#), su antiguo rival, por el acceso al Mar Rojo, sino que su intención era abordar esta cuestión pacíficamente mediante el diálogo. No obstante, semanas antes en febrero, se había filtrado [en la cumbre de la UA](#) y en redes sociales un mapa en el que se incluía el [puerto eritreo de Assab](#) como parte del mapa de Etiopía, lo que provocó las quejas de la delegación eritrea ante la UA y la retirada del post en internet.

Los medios de comunicación estatales de ambos países también están llevando a cabo una campaña de movilización de la opinión pública que contribuye a este clima de tensión, mientras los diplomáticos etíopes y eritreos presentan sus respectivas posturas a sus homólogos en el Cuerno de África y otros lugares. En diciembre, el medio de comunicación estatal etíope [Fana TV, criticó abiertamente al presidente eritreo](#), Isaias Afewerki, lo que significaba la primera crítica abierta tras el acuerdo de 2018. Esta comunicación se produjo tras una entrevista al presidente eritreo, realizada a finales de noviembre, en la que este criticaba la Constitución de Etiopía y defendía el acuerdo alcanzado en octubre entre Egipto, Eritrea y Somalia. En este sentido, en enero, los ministros de Exteriores de [Eritrea, Egipto y Somalia](#) se reunieron en El Cairo para celebrar su primera reunión trilateral tras el acuerdo alcanzado entre sus respectivos presidentes en octubre, en el que acordaron aumentar la cooperación regional y la seguridad común. El 25 de diciembre, el presidente de Somalia visitó a su homólogo eritreo en Asmara, reunión que tuvo lugar pocos días después del [acuerdo alcanzado entre Etiopía y Somalia](#) relativo a la tensión bilateral entre ambos.

En los últimos meses ambos países también han llevado a cabo [acciones sobre el terreno](#) que ponen de manifiesto este deterioro de la situación. Según destacó la organización Human Rights Concern Eritrea, este país emitió en febrero una directiva a todas las administraciones regionales para que registren y movilicen a los ciudadanos menores de 60 años para el [reentrenamiento y la práctica militar](#). Esta amplia medida incluye a los reclutas desmovilizados y a quienes recibieron un trato especial durante su servicio, lo que les obliga a permanecer en lista de espera. Además, se ha ordenado a las reclutas casadas y a aquellas con hijos que regresen a sus respectivas unidades militares. Por su parte, Etiopía ha desplegado tropas en la zona fronteriza

conjunta. La ONU, la UA, EEUU, UE, entre otros, han realizado un llamamiento a las partes a rebajar la tensión.

ETIOPÍA – SOMALIA

Se produce una mejora de la relación bilateral

Se producen una serie de acontecimientos que ponen de manifiesto la mejora de la relación entre Etiopía y Somalia, tras la firma del acuerdo entre ambos países a finales de 2024. El 11 de diciembre Somalia y Etiopía alcanzaron un acuerdo conocido como la **Declaración de Ankara**, que abordaba las principales demandas de ambos países. Somalia consiguió que Etiopía reconociera su integridad territorial y a Etiopía se le aseguró acceso a la costa somalí desde y hacia el mar. Este acuerdo, facilitado por Türkiye, pretendía poner fin a la grave crisis desatada entre ambos países durante 2024.

Durante el mes de febrero el primer ministro etíope, Abiy Ahmed, y el presidente somalí, Mohamud, se reunieron en diversas ocasiones para fortalecer las relaciones mutuas. Así, **celebraron una reunión** en los márgenes de la 38ª cumbre ordinaria de la UA que tuvo lugar en febrero en Addis Abeba para, entre otras cuestiones, abordar los términos de la participación de Etiopía en la nueva misión de la UA en Somalia. En este sentido, el 23 de febrero alcanzaron un acuerdo para prolongar la presencia de las tropas etíopes en la misión de la UA de Estabilización en Somalia (AUSSOM), que sustituye a la ATMIS, y que a finales de diciembre, cuando se producía el relevo con un nuevo mandato que entraba en vigor el 1 de enero de 2025, **todavía no estaba clara su composición y países contribuyentes**. Con este acuerdo Etiopía se ha consolidado como un actor clave en el panorama de seguridad de Somalia, al aprobar la permanencia de tropas etíopes en Somalia y su **participación en la AUSSOM con un cupo de 2500 soldados**. Esta asignación supera la otorgada a otros países contribuyentes, como Djibouti, Kenya y Egipto. A su vez, el 27 de febrero **el primer ministro etíope visitó Mogadiscio** por primera vez desde que estalló la crisis entre ambos países para reunirse con el presidente somalí, y tras la reunión emitieron un comunicado conjunto según el cual reafirmaban su compromiso en fortalecer la cooperación para beneficio mutuo. Se espera que los líderes finalicen los detalles del acceso marítimo comercial de Etiopía vía la costa de Somalia, incluyendo las modalidades para su implementación.

La última crisis bilateral, en el marco de unas relaciones históricamente complejas, se desencadenó a raíz de la firma de un acuerdo en enero de 2024 entre Etiopía y Somalilandia en el que esta región autoproclamada independiente de Somalia cedía a Etiopía una base naval permanente y servicio marítimo comercial en el Golfo de Adén a través de un acuerdo de arrendamiento por una extensión de 20 kilómetros de costa durante un periodo de cincuenta años, según detallaron los gobiernos etíope y somalilandés. A cambio, según el presidente de

Somalilandia, Etiopía reconocería internacionalmente a su región como un país independiente.

SOMALIA (PUNTLANDIA)

Ofensiva de los cuerpos de seguridad de Puntlandia contra Estado Islámico en Somalia

Los cuerpos de seguridad de Puntlandia (noreste de Somalia) han llevado a cabo desde finales de diciembre una ofensiva contra la presencia del grupo armado Estado Islámico en Somalia (ISS, o ISIS-Somalia) que ha causado numerosas víctimas mortales en las filas del grupo armado y también de miembros de los cuerpos de seguridad. Dicha operación, llamada Hilaac (iluminación) se ha desarrollado en las áreas montañosas de la región de Bari, en Puntlandia. Los cuerpos de seguridad han tomado diversas localidades, operaciones en las que habrían causado decenas de víctimas mortales y en las que habrían participado militantes extranjeros enrolados en ISS así como EEUU, que habría llevado a cabo diversos ataques aéreos en apoyo de los cuerpos de seguridad de Puntlandia el 1 y el 16 de febrero, y también Emiratos Árabes Unidos (EAU), que habría proporcionado apoyo mediante drones. En los bombardeos estadounidenses de principios de febrero habrían muerto algunos **miembros de alto rango de ISS** en Puntlandia. Un comunicado del Gobierno somalí afirmó que la operación en la región de Bari fue coordinada conjuntamente por los Gobiernos somalí y estadounidense y tenía como objetivo altos líderes del ISS. Por su parte, ISS llevó a cabo un **ataque el 10 de febrero contra una base militar de Puntlandia**, en el área de Togga Jacel, en las montañas de Cal Miskaad (Bari) que habría causado la muerte de 70 combatientes de ISS y de 27 soldados de Puntlandia, lo que pone de manifiesto la creciente presencia del grupo en esta región de Somalia. En este ataque habrían resultado heridos otros 60 combatientes de ambos bandos. Según miembros de los cuerpos de seguridad de Puntlandia, los militantes utilizaron coches bomba y motocicletas suicidas para lanzar ataques contra la base militar antes de que se produjera un fuerte tiroteo, que fue rechazado por los cuerpos de seguridad de la base militar. Se estima que **ISS cuenta con entre 700 y 1.500 combatientes**, parte de los cuales son originarios de otros países.

Según el Africa Center for Strategic Studies (ACSS), **ISS se ha convertido en un canal financiero cada vez más importante para la red mundial de ISIS en los últimos años**, tras haber establecido un centro neurálgico para sus operaciones en la región de Puntlandia, en el noreste de Somalia. Esto ha venido acompañado de una afluencia de combatientes extranjeros procedentes del norte de África, el Golfo Pérsico y África Oriental. ISS ha mantenido un perfil bajo en Somalia en los últimos años, salvo algunos enfrentamientos con las fuerzas de al-Shabaab en las ciudades costeras de Bossaso y Qandala, en Puntlandia. Los ataques aéreos estadounidenses contra las bases de ISS a mediados de 2024 y principios de 2025 tuvieron como objetivo desmantelar esta red. El **Grupo de Expertos**

de la ONU en su informe de octubre de 2024 alertaba sobre el resurgimiento de la oficina de Al-Karrar como centro administrativo y financiero clave para ISIS a nivel mundial. La presencia del ISS se concentraba en la región de Bari (Puntlandia), donde se intensificaron la extorsión y el contrabando y se registró una afluencia de combatientes extranjeros, lo cual plantea nuevos riesgos en materia de seguridad para Somalia y para la región.

SUDAN

El Ejército retoma el control de la capital semanas después de que las RSF declarasen el establecimiento de un gobierno paralelo en el oeste del país

A finales de marzo las Fuerzas Armadas Sudanesas (FAS) retomaron el control de gran parte de la capital del país, Jartum. Con el respaldo de drones, aviones de guerra y una importante ventaja en efectivos de combate, las Fuerzas Armadas habían avanzado hacia la capital a lo largo de los últimos meses. La toma de la capital se inició con la expulsión de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) de la localidad de Nilo Oriental a principios de marzo, que facilitó la ofensiva posterior sobre Jartum. Posteriormente, el 21 de marzo, el Ejército se hizo con el control de lugares clave en la capital, como el palacio presidencial, el aeropuerto internacional, los barrios del este y sureste, el complejo militar-industrial de Yarmuk y la sede de la Policía de Reserva Central. Una semana después, el Ejército expulsó a los paramilitares de las zonas controladas en el este y el sur de la capital. El general Abdel Fattah al-Burhan, jefe del Ejército, declaró a Jartum “libre” de las RSF tras aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Jartum –en lo que fue el primer vuelo de este tipo desde el inicio de la guerra– antes de dirigirse al palacio presidencial. La reconquista de Jartum representó una importante victoria simbólica para el Ejército, que perdió la mayor parte de la capital en los primeros días de la guerra en abril de 2023, dejando a sus fuerzas confinadas en unas pocas bases asediadas repartidas por la ciudad.

Medios locales subrayaron que la caída de Jartum en manos del Ejército sudanés allana el camino para el regreso de millones de personas que se habían desplazado de sus hogares desde el inicio de la guerra. Aproximadamente 14 millones de personas han sido desplazadas tanto dentro del país como a países vecinos. De ellas, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), estima que 11,3 millones de personas se encontraban desplazadas internamente en Sudán, la mayoría provenientes de Jartum, Darfur del Sur y Darfur del Norte. Asimismo, casi cuatro millones de personas han buscado refugio en países vecinos, huyendo la mayor parte a Egipto, Sudán del Sur y Chad.

Las RSF, tras perder el control de la capital emitieron un comunicado afirmando que no habían sido derrotadas, sino que habían tomado la decisión estratégica de

reposicionar sus fuerzas para alcanzar objetivos militares y expandir su presencia en otros frentes, hacia el oeste del país. En este sentido resulta importante resaltar que previamente, el 23 de febrero, las RSF habían firmado en Nairobi una carta de transición que respaldaba, entre otras disposiciones, el establecimiento de un Estado laico y la formación de un “gobierno de paz y unidad” en las zonas bajo su control. Esta carta contó con el respaldo de diversos grupos políticos sudaneses, grupos de la sociedad civil y algunos movimientos armados aliados (facciones del Frente Revolucionario de Sudán, el Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán-Norte (SPLM-N) dirigido por Abdelaziz al-Hilu y el Partido Nacional Umma, entre otros). Numerosos Estados y organismos supranacionales (EEUU, Arabia Saudita, Egipto, Kuwait, Jordania, Somalia, Qatar, la ONU o la UA, entre otros) manifestaron su preocupación y rechazo a la decisión, denunciando que no ayudará a llevar la paz y la seguridad a Sudán. Emiratos Árabes Unidos, que ha sido acusado en repetidas ocasiones de suministrar armas a las RSF, no se pronunció al respecto. El Consejo de Paz y Seguridad (CPS) de la UA condenó enérgicamente el establecimiento de un gobierno paralelo en Sudán, advirtiendo que podría llevar a la división del país, e instó a todos los Estados miembros de la UA y a la comunidad internacional a no reconocer a la entidad. Si bien la guerra parece estar remitiendo en el centro de Sudán, los combates continúan principalmente en el oeste del país, zona del gobierno paralelo declarado por las RSF y aliados.

SUDÁN DEL SUR

Aumenta el riesgo de reinicio de la guerra civil tras múltiples enfrentamientos armados y la detención del vicepresidente

El 26 de marzo, el Gobierno presidido por Salva Kiir, ordenó la detención del vicepresidente, Riek Machar, junto a su esposa, Angelina Teny, ministra del Interior, generando un importante revés para el Acuerdo de Paz Revitalizado firmado entre las partes en 2018 y que puso fin a cinco años de guerra civil. El SPLM-IO, partido que dirige Machar, condenó el arresto como “inconstitucional” y lo describió como una ruptura del acuerdo de paz. Tras la detención de Machar estallaron combates cerca de Juba, lo que hace temer una nueva escalada de la violencia.

La inestabilidad en el país comenzó a desbordarse con un estallido de violencia el pasado 4 de marzo, cuando una milicia rebelde denominada Ejército Blanco, alineada originalmente con el SPLM-IO, tomó una guarnición del Ejército en Nasir, en el estado de Alto Nilo (norte). El ataque en Nasir se saldó con la muerte de más de 30 soldados, entre ellos el general Majur Duk y un miembro de la ONU. La violencia también provocó el desplazamiento de al menos 50.000 personas, según fuentes de la ONU. En respuesta, el Gobierno de Kiir detuvo en Juba a altos funcionarios de la oposición, entre ellos al ministro de Petróleo, al ministro de Consolidación de la Paz, al subjefe del Ejército y a otros altos funcionarios militares aliados

con Machar. Asimismo, **Uganda desplegó tropas en el país** en un intento por proteger al Gobierno de su aliado Kiir.

El arresto de Machar –quien permanece en arresto domiciliario– provocó preocupación internacional. La Misión de las Naciones Unidas en Sudán del Sur (UNMISS) emitió una declaración en la que advertía sobre la posibilidad de que se reanudara el conflicto. La Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD, por sus siglas en inglés), que medió en el acuerdo de 2018, dijo que la crisis corría el riesgo de descarrilar el proceso de paz y desencadenar una “guerra a gran escala”. Por su parte, el presidente de Kenya, William Ruto –que funge como mediador en las negociaciones de paz entre el Gobierno sursudanés y los grupos armados no signatarios

del Acuerdo de Paz de 2018– nombró al ex primer ministro Raila Odinga como enviado especial a Sudán del Sur para **tratar de calmar las tensiones**. También líderes de los organismos eclesiásticos más grandes de Sudán del Sur se reunieron con el presidente Salva Kiir y el segundo vicepresidente Benjamin Bol Mel y pidieron el diálogo y el cese de las hostilidades.

El aumento de la tensión en el país se reflejó en la decisión de Alemania y Noruega de cerrar sus embajadas, mientras que Reino Unido y EEUU redujeron el personal de la embajada, evacuando al personal “no esencial”. EEUU y Canadá aconsejaron a los ciudadanos que considerasen salir del país por medios comerciales mientras aún estén disponibles.

AMÉRICA

COLOMBIA: El recrudecimiento de la violencia en el Catatumbo lleva a la suspensión de las negociaciones con el ELN

VENEZUELA – GUYANA: Se incrementa la tensión entre ambos países por la región en disputa del Esequibo

COLOMBIA

El recrudecimiento de la violencia en el Catatumbo lleva a la suspensión de las negociaciones con el ELN

Desde principios de año se intensifica la violencia armada en la zona del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander, con graves choques entre diferentes grupos armados que operan en la zona y con las fuerzas de seguridad colombianas. La ofensiva la iniciaba el grupo armado ELN contra el Estado Mayor de los Bloques, grupo surgido de la división del Estado Mayor Central (EMC), que a su vez emana como grupo disidente de las FARC. **El EMC se conformó con aquellos dirigentes y combatientes de las FARC que no se sumaron a la firma del acuerdo de paz con el Gobierno colombiano en 2016**. Sin embargo, en el marco de la política conocida como “Paz Total” impulsada por el presidente Gustavo Petro, el EMC inició negociaciones de paz con el Gobierno de manera oficial en 2023. El Estado Mayor de los Bloques, liderado por Calarcá Córdoba, decidió continuar las negociaciones de paz con el Gobierno colombiano cuando el bloque comandado por Iván Mordisco abandonó el proceso de paz. El 16 de enero, el ELN iniciaba una ofensiva contra el Estado Mayor de los Bloques, que **provocó un centenar de muertes como consecuencia de la violencia, el desplazamiento forzado de 60.000 personas y el confinamiento de otras 16.000 en las semanas siguientes**. Varios integrantes del grupo armado y también firmantes del acuerdo de 2016 fueron asesinados y en los días siguientes, tras estos asesinatos selectivos, se iniciaron enfrentamientos entre los grupos

armados presentes en la zona. Los cuatro firmantes del acuerdo de 2016 asesinados habrían sido sacados de sus casas y ejecutados por el ELN. Posteriormente, la Jurisdicción Especial para la Paz ordenó la evacuación de 124 firmantes de paz de la zona, por el riesgo ante la situación de violencia. Según un informe de Indepaz, **la pérdida de control territorial por parte del ELN entre 2020 y 2024 como consecuencia de la acción de las fuerzas de seguridad y de grupos armados como las facciones del EMC lideradas por Iván Mordisco o el grupo narcoparamilitar Clan del Golfo, habría llevado al ELN a lanzar esta ofensiva con el objetivo de recuperar su dominio territorial**.

En respuesta a los enfrentamientos armados, **el presidente Gustavo Petro suspendió las conversaciones de paz con el ELN**, señalando que la acción del grupo armado en el Catatumbo constituía “crímenes de guerra” y el 21 de enero declaró el estado de conmoción interior, uno de los formatos del estado de excepción autorizados por la Constitución del país. En paralelo, proclamó el estado de emergencia económica, señalando que se hacía frente a la situación mediante una aproximación que no pasara solo por la seguridad militar, aunque se desplegaron 300 soldados adicionales en la zona. En marzo el Frente 33 del Estado Mayor de los Bloques inició una contraofensiva contra el ELN tratando de recuperar los territorios perdidos en enero y se produjeron enfrentamientos y asesinatos en la zona rural de Tibú. El Frente 33 secuestró a un líder campesino a quien acusó de complicidad con el ELN, en paralelo se produjeron varios asesinatos sin esclarecer y una escalada de la violencia. Diferentes organizaciones



Fuente: Consejería Comisionada de Paz, Gobierno de Colombia

de derechos humanos y de defensa de los derechos de la población indígena de la zona expresaron su condena y preocupación por la violencia, denunciando los graves impactos que estaba teniendo en la vida de la población civil, por la situación de terror y desplazamiento que se había generado en la zona. A finales de marzo, seguían sin darse condiciones de seguridad para el retorno de la población desplazada como consecuencia de la violencia. **El Catatumbo es epicentro del cultivo de coca y Tibú es el municipio en el que se produce una mayor concentración de este tipo de cultivos en el mundo.**

En paralelo a los enfrentamientos armados en el Catatumbo, también se produjeron choques violentos entre integrantes de las diferentes facciones del EMC en el Guaviare, en la Amazonía colombiana. Estos enfrentamientos motivaron la emisión de una alerta por parte de la Defensoría del Pueblo, alertando de los graves riesgos para la población. Los enfrentamientos se produjeron en zonas de gran valor estratégico para las economías ilícitas que sustentan la actividad de los grupos armados, como el narcotráfico y la explotación de recursos naturales vinculados a la minería y la deforestación de esta región colombiana. Posteriormente, la Defensoría del Pueblo también alertó sobre otros 11 focos de emergencia humanitaria en diferentes zonas del país afectadas por el conflicto armado, como Putumayo y Chocó, entre otras. En estas zonas se han producido enfrentamientos armados y paros armados –acciones de los grupos armados mediante las que fuerzan la paralización de la movilidad y la actividad económica y académica de una determinada zona–, forzando el confinamiento de centenares de personas.

VENEZUELA – GUYANA

Se incrementa la tensión entre ambos países por la región en disputa del Esequibo

Se incrementa notablemente la tensión entre ambos países después de que, durante una visita a Guyana, el secretario de Estado de EEUU, **Marco Rubio**, advirtiera a **Venezuela de que un ataque militar o acciones agresivas contra Guyana o ExxonMobil serían “un gran error” y tendrían graves consecuencias para Caracas.** Aunque Rubio no detalló ni anticipó las acciones de EEUU ante tales escenarios, sí alertó a Venezuela contra cualquier

“aventurismo”, advirtió que Washington dispone de una Armada grande que puede llegar a cualquier parte del mundo y declaró que su Gobierno tiene compromisos vigentes con Guyana. Además, Rubio criticó que las amenazas por parte de Venezuela, a quien calificó de régimen narcotraficante, se basan en reclamos territoriales ilegítimos. La visita, durante la que se firmaron nuevos acuerdos de cooperación en temas de defensa y seguridad –especialmente en instalaciones petroleras marítimas–, coincidió con la realización de **ejercicios militares conjuntos entre las armadas de ambos países en aguas internacionales y en la Zona Económica Exclusiva de Guyana.** El presidente de Guyana, Irfaan Ali, celebró el respaldo de Rubio y declaró su satisfacción con la garantía de salvaguarda de la integridad territorial y soberanía del país por parte de EEUU. Por su parte, el presidente venezolano Nicolás Maduro, criticó a Rubio –al que calificó de imbécil– por amenazar a su país, mientras que la vicepresidenta del país, Delcy Rodríguez, llamó a la paralización inmediata de las exploraciones petrolíferas en una zona en disputa que considera está pendiente de delimitar. Rodríguez denunció que la posición conjunta de Guyana y EEUU atentan contra la paz y estabilidad de la región y **llamó a Guyana a iniciar negociaciones** sobre el histórico contencioso territorial del Esequibo. La Fuerza Armada venezolana, que en los últimos meses había movilizado vehículos militares cerca de las regiones fronterizas, advirtió que respondería con firmeza y determinación a cualquier provocación o acción que atente contra la integridad territorial del país.

La tensión entre ambos países ya había escalado seriamente a principios de mes, después de que el **Gobierno de Guyana denunciara que una corbeta de la Armada venezolana se adentró en aguas en disputa y se aproximó a una plataforma de ExxonMobil**, pasando cerca de varios barcos utilizados para almacenar el petróleo. El presidente de Guyana señaló que varios aviones y embarcaciones habían sido desplegados para apoyar el gran número de barcos de perforación que operan en la región. En un discurso televisado, el mandatario declaró haber convocado a consultas al embajador de Venezuela para presentar una protesta formal y señaló que Guyana había notificado el incidente a todos sus aliados internacionales, incluido EEUU. El presidente guyanés consideró que la mencionada incursión era gravemente preocupante porque violaba las fronteras marítimas de Guyana, que según él están reconocidas por el derecho internacional. Según algunos análisis, este es el incidente más cercano a la frontera entre ambos países que se ha registrado en la última década. En dos incidentes anteriores en 2013 y 2018, por ejemplo, se detuvo a las tripulaciones de los barcos, pero ocurrieron en un lugar más lejano a la zona en disputa. El Gobierno estadounidense declaró que una mayor provocación resultaría en consecuencias para Venezuela. Caracas, por su parte, desmintió cualquier violación del territorio marítimo de Guyana porque las aguas en las que se produjo el incidente son un área cuya delimitación está pendiente y, por tanto, no forman parte del territorio guyanés y las concesiones de explotación

de recursos energéticos en esas áreas son ilegales. Poco antes, a mediados de febrero, seis soldados guyaneses habían resultado heridos durante tiroteo en la frontera común por parte de presuntos miembros de una banda venezolana involucrada en la minería ilegal de oro en la región en disputa del Esequibo. Guyana convocó al embajador venezolano e instó a Caracas a abordar la actividad delictiva en la región fronteriza para prevenir incidentes similares en el futuro. Por otra parte, la relación diplomática entre Venezuela y Guyana se había deteriorado

por la pretensión de Venezuela de que en las elecciones parlamentarias y regionales del 25 de mayo se eligiera también al **gobernador del Esequibo y a ocho diputados a la Asamblea Nacional en representación de dicha región**. Guyana amenazó a quienes participen en dichos comicios de ser juzgados por traición a la patria, mientras que la organización regional CARICOM criticó el anuncio de Venezuela por considerar que puede desestabilizar la región y provocar un conflicto entre Estados.

ASIA Y EL PACÍFICO

AFGANISTÁN – PAKISTÁN: Persiste la tensión con nuevos enfrentamientos armados en la frontera

COREA DEL NORTE – COREA DEL SUR: Se incrementa la tensión bilateral y entre Corea del Norte y EEUU

MYANMAR: Un terremoto de grave magnitud asola el país en un contexto de recrudecimiento del conflicto armado

TAILANDIA (SUR): El Gobierno cuestiona que las negociaciones de paz sean la mejor estrategia para poner fin al conflicto armado en el sur

AFGANISTÁN – PAKISTÁN

Persiste la tensión con nuevos enfrentamientos armados en la frontera

La tensión entre Afganistán y Pakistán se mantuvo activa durante los primeros meses del año. Como sucediera en el último trimestre de 2024, también los primeros meses de 2025 se caracterizaron por algunos episodios de violencia entre las fuerzas de seguridad de ambos países y la tensión diplomática. **En diciembre se había producido uno de los episodios de violencia más graves hasta el momento**, cuando un ataque aéreo pakistaní en la provincia afgana de Paktika resultó en la muerte de al menos 46 personas, en su mayoría mujeres y niños. Este incidente aumentó las tensiones y llevó a una respuesta armada por parte de las fuerzas talibanes afganas, que atacaron puestos fronterizos paquistaníes en Kurram y Waziristán del Norte. En febrero tuvo lugar una nueva escalada de la violencia, cuando **se produjeron enfrentamientos en torno al paso fronterizo de Torkham, el más importante de los cruces fronterizos entre Afganistán y Pakistán**. El **paso fronterizo había sido cerrado en febrero** como consecuencia de una disputa en torno a la construcción de puestos militares a ambos lados de la frontera. El cierre tuvo un importante impacto económico y provocó que miles de transportistas quedaran en la zona limítrofe sin poder pasar al otro país. Se trata de uno de los principales puntos de tránsito tanto de mercancías como de personas entre Afganistán y Pakistán. Esta situación de tensión en la zona fue el detonante del inicio de la violencia, en un contexto también en el que el Gobierno de Pakistán ha acusado repetidamente al Gobierno talibán afgano de permisividad con la insurgencia talibán que opera en Pakistán desde sus bases en el país vecino y que no han

cesado de aumentar desde la toma del poder por parte de los talibanes afganos en 2021. Como consecuencia de los enfrentamientos en Torkham, **15.000 personas se desplazaron de manera forzada** en las horas posteriores. Finalmente, el 19 de marzo, después de prácticamente un mes de cierre, se reabrió el paso fronterizo permitiendo el tránsito de transportes entre ambos países. La reapertura del paso se produjo después de que una jirga (asamblea tradicional) de ancianos y comerciantes alcanzara un acuerdo. El acuerdo contemplaba un alto el fuego en la frontera hasta el 15 de abril, así como la paralización de las construcciones que se estaban levantando en la frontera y que dieron lugar a los enfrentamientos armados entre las fuerzas de seguridad de los dos países. No obstante, persistieron los enfrentamientos armados entre las fuerzas de seguridad pakistaníes e insurgentes del grupo armado talibán pakistaní TTP, desde cuyas bases en territorio afgano opera. Pakistán acusa a Afganistán de amparar a la insurgencia talibán pakistaní y durante 2024 llevó ataques armados contra las bases de este grupo en el país vecino, dando lugar a una escalada de la violencia entre las fuerzas de seguridad de ambos países. En paralelo a estos enfrentamientos, **se produjeron acusaciones mutuas por parte de ambos Gobiernos de permisividad con la acción armada de ISIS-KP**, facción de ISIS que opera en la región. Si bien tanto el régimen talibán como las fuerzas de seguridad pakistaníes han llevado a cabo operaciones contra esta organización armada, la actividad de ISIS-KP persiste en ambos países. Pakistán acusa a Afganistán de no hacer lo suficiente para poner fin a las bases en este país desde las que ISIS-KP estaría llevando a cabo su acción insurgente.

En paralelo a los enfrentamientos armados y la tensión militar, el Gobierno de Pakistán reveló nuevos planes para

la expulsión de personas refugiadas afganas. En febrero Pakistán anunció que expulsaría a todas estas personas refugiadas de Islamabad y Rawalpindi con el objetivo de repatriarlas a Afganistán. Se trataría de un plan que tendría el objetivo inicial de expulsar a la población afgana carente de documentación legal de residencial y posteriormente a quienes estuvieran en posesión de la carta de ciudadanía afgana. Tanto ACNUR como la OIM expresaron su preocupación por esta iniciativa. Desde 2023 más de 800.000 personas refugiadas afganas han sido repatriadas a Afganistán, en su mayoría mujeres y menores. **Human Rights Watch señaló que estos retornos forzados suponían un enorme riesgo para las personas afganas repatriadas, especialmente para aquellas que se habían involucrado con el anterior Gobierno o las fuerzas extranjeras en el país.** Además, el colapso económico y humanitario del país suponen el retorno en condiciones de extrema precariedad y pobreza para la población refugiada.

COREA DEL NORTE – COREA DEL SUR

Se incrementa la tensión bilateral y entre Corea del Norte y EEUU

El presidente interino y primer ministro de Corea del Sur, Han Duck-soo, declaró a finales de marzo que **la situación de seguridad que enfrenta el país es más grave que nunca** y pidió la máxima preparación militar contra las provocaciones nucleares, ciberataques y lanzamiento de misiles de Corea del Norte e instó a incrementar la cooperación con sus aliados, incluyendo a EEUU. Tales declaraciones de Han Duck-soo –que había sustituido al expresidente Yoon Suk-yeol tras ser destituido a mediados de diciembre por la declaración de la ley marcial, pero que también había sido cesado por la Asamblea Nacional poco después– se produjeron poco después de que el Tribunal Constitucional lo restituyera en sus funciones. Poco antes de este llamamiento del presidente, el ministro de Exteriores había declarado ante la Asamblea Nacional que, aunque era prematuro hablar de ello, **el desarrollo de armas nucleares por parte del Corea del Sur no estaba descartado.** El ministro declaró que la impredecibilidad de los asuntos internacionales y la invitación de la nueva administración estadounidense a que Corea del Sur y otros países de Asia desarrollaran capacidades de disuasión nuclear independientes hacían que Seúl tuviera que contemplar todos los escenarios posibles. Aunque tradicionalmente Washington se había opuesto al desarrollo de armas nucleares por parte de Corea del Sur, al inicio de su primer mandato en 2016 el actual presidente Donald Trump ya se había mostrado favorable a que Corea del Sur –y Japón– desarrollaran sus propias capacidades de disuasión nuclear ante la amenaza de Corea del Norte. Algunos análisis consideran que Corea del Sur dispone de los recursos y la capacidad tecnológica para fabricar tales armas, y también que un porcentaje significativo de la población surcoreana se muestra favorable a dicha opción. El anterior presidente, Yoon Suk-yeol, ya señaló en 2023 que el acelerado deterioro de las relaciones intercoreanas

obligaba a su Gobierno a contemplar la fabricación de armas nucleares o bien un mayor y más fácil acceso a ellas. El ministro de Defensa también señaló entonces que tal decisión debía mantenerse encima de la mesa.

En los primeros meses del año no solamente se tensaron las relaciones entre Corea del Norte y Corea del Sur, sino también entre Pyongyang y Washington. A pesar de que Donald Trump en varias ocasiones se había referido a Kim Jong Un en términos elogiosos y amistosos y de que a principios de 2025 **declaró su intención de contactar con él y de establecer relaciones con el régimen norcoreano** –provocando especulaciones sobre un posible diálogo entre ambos–, en varias ocasiones el Gobierno norcoreano criticó la actitud hostil de Washington y los ejercicios militares conjuntos de EEUU con Corea del Sur. Concretamente, Kim Yo-jong, alta mandataria del régimen y hermana de Kim Jong-un, declaró que el nuevo Gobierno de EEUU había intensificado las provocaciones políticas y militares contra su país, continuando la política hostil de la administración anterior, por lo que abrió la puerta a que Pyongyang reforzara indefinidamente su capacidad de disuasión nuclear. En enero, coincidiendo con la visita del entonces secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, a Seúl, Corea del Norte realizó una prueba de un misil balístico de alcance intermedio –su primer lanzamiento desde noviembre– y posteriormente, ya a finales de mes, realizó una prueba de misiles de crucero mar-tierra. En febrero el Gobierno norcoreano criticó duramente los ejercicios militares conjuntos de tres semanas entre EEUU y Corea del Sur, que incluyeron ejercicios con fuego real a escasa distancia de la zona desmilitarizada en la frontera entre ambos países, el despliegue de bombarderos estratégicos estadounidenses en la península coreana y la llegada a la ciudad surcoreana de Busan de un submarino nuclear estadounidense. A principios de marzo, coincidiendo con el inicio de los ejercicios militares conjuntos anuales –denominados “**Escudo de la Libertad**”–, Corea del Norte disparó múltiples **misiles balísticos al Mar Amarillo** –en la quinta ronda de lanzamientos de 2025– y declaró que tales ejercicios eran un ensayo de guerra agresivo y confrontativo que podrían provocar un conflicto militar en la península de Corea.

MYANMAR

Un terremoto de grave magnitud asola el país en un contexto de recrudecimiento del conflicto armado

A finales de marzo se produjo un terremoto en Myanmar de magnitud 7,7 que agravó la situación humanitaria del país, donde el conflicto armado se había recrudecido desde principios de año, especialmente en el estado Rakhine. Tras las grandes pérdidas de territorio por parte de las fuerzas de seguridad en este estado en diciembre, el control gubernamental quedó reducido prácticamente a la capital de Rakhine, Sittwe y alguna zona adicional. Esto motivó una respuesta militar durante el mes de enero en un intento del Gobierno militar por recuperar el control de

algunas de las zonas perdidas en favor de la insurgencia del grupo armado rakain AA. Así, en enero se registraron bombardeos aéreos y enfrentamientos armados entre la insurgencia étnica y las fuerzas armadas birmanas. Uno de estos bombardeos habría alcanzado un centro de detención del AA, donde habrían muerto cerca de 30 personas, que según el grupo armado eran miembros de las fuerzas de seguridad y familiares, incluyendo menores. Tras estos avances, **en febrero el AA inició sus operaciones para tratar de tomar el control de la capital del estado**. Un segundo frente situado 100 kilómetros al sur de Sittwe incluía la ciudad costera de Kyaukphyu, la base naval de Danyawady y un puerto y una Zona Económica Especial en las inmediaciones, con oleoductos y gaseoductos. A finales de marzo parecía inminente la toma de estos enclaves por parte del AA, el grupo armado que habría logrado mayores éxitos militares dominando la práctica totalidad del estado Rakhine. El AA, que contaría con una fuerza de 30.000 combatientes aproximadamente, se ha aliado con grupos de defensa popular (PDF) surgidos en oposición al régimen militar tras el golpe de Estado de febrero de 2021 y con otros grupos armados étnicos. La captura en diciembre del Comando Militar Regional Occidental, con la toma de la ciudad de Ann, en la zona central de Rakhine, dio un impulso a la acción militar del AA, consolidando sus avances a pesar de la intensificación de la respuesta militar por parte del régimen birmano. Por otra parte, a finales de marzo **se intensificaron los enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y el AA y la región Ayeyarwaddy**, en la zona fronteriza con el estado Rakhine, provocando el desplazamiento forzado de miles de personas. Los bombardeos aéreos y los enfrentamientos en esta zona causaron la muerte de 120 personas.

En paralelo, **el grupo armado KIA también tuvo notables avances militares en el estado Kachin, reduciendo enormemente el control territorial gubernamental**. Así pues, se consolidaba el avance insurgente que había caracterizado las dinámicas de conflicto durante el año 2024, donde la escalada de la violencia significó una importante derrota de la Junta Militar que fue perdiendo territorio a medida que avanzaba el año. El KIA capturó diversos emplazamientos cercanos a la frontera con China de gran importancia debido a la presencia de minas de tierras raras desde las que el país vecino se abastece.

La situación del país empeoró gravemente tras el terremoto que tuvo lugar el 28 de marzo, de magnitud 7,7 y con epicentro en la ciudad de Mandalay, pero que afectó gravemente a otras ciudades como Naypydaw – capital administrativa del país–, la región de Sagaing o el sur del estado Shan, y también a países de la región como Tailandia o China. Las informaciones oficiales señalaban que habían muerto más de 2.700 personas, 300 estaban desaparecidas y 3.400 personas había resultado heridas. Sin embargo, **se temía que las cifras pudieran ser mucho más elevadas, dado el bloqueo a la prensa internacional en las zonas afectadas por el seísmo**. Además, importantes infraestructuras resultaron afectadas, como la torre de control del aeropuerto de Naypydaw, que se derrumbó. La Junta Militar solicitó apoyo internacional para el rescate

de las víctimas, lo que suscitó preocupación entre las organizaciones de derechos humanos del país o en el exilio por la utilización que la Junta podría realizar de esta ayuda. Si bien algunos países como China, India, Malaysia, Rusia, Singapur y Tailandia enviaron equipos de rescate y/o ayuda humanitaria, al mismo tiempo **se repetían las denuncias sobre la persistencia de los bombardeos aéreos por parte de la Junta Militar, incluyendo en zonas afectadas por el terremoto**. Tras el terremoto persistía la incertidumbre sobre la posible evolución del conflicto armado como consecuencia de la crisis humanitaria, ya que si bien el Gobierno Nacional de Unidad (NUG), surgido como respuesta al golpe de Estado de 2021, hizo un llamamiento a un alto el fuego de dos semanas, no representa al conjunto de las organizaciones armadas de oposición a la Junta Militar, especialmente a los grupos armados de origen étnico cuya actividad insurgente data de varias décadas atrás.

TAILANDIA (SUR)

El Gobierno cuestiona que las negociaciones de paz sean la mejor estrategia para poner fin al conflicto armado en el sur

Poco después de una serie de ataques armados durante el Ramadán –período en el que el Gobierno había intentado una tregua con el BRN, el principal grupo armado en las provincias sureñas de mayoría musulmana–, en marzo Bangkok cuestionó la efectividad de las negociaciones de paz iniciadas en 2013 para poner fin al conflicto armado que se inició en 2004. A mediados de febrero, el jefe del Consejo de Seguridad Nacional y anterior jefe del panel negociador del Gobierno, Chatchai Bangchud, se reunió en Malasia con el negociador jefe del BRN, Anas Abdulrahman, para discutir una **propuesta de cese del fuego durante el Ramadán**. El 28 de febrero, el día que se iniciaba el Ramadán, el Gobierno hizo una declaración en la que se comprometía a “ajustar sus misiones de trabajo para centrarse en operaciones pacíficas” y también a hacer todo lo posible para crear una atmósfera propicia para la paz durante el Ramadán. A pesar de tal acercamiento entre las partes y del anuncio del Gobierno, que algunos medios interpretaron como una declaración de facto de cese unilateral de hostilidades, a mediados de marzo Bangkok denunció que dicha tregua no solamente no se materializó sino que el BRN había incrementado sus **acciones armadas** durante dicho periodo, incluyendo varios **ataques consecutivos entre el 8 y el 10 de marzo** en los que seis personas murieron y más de una decena resultaron heridas. Según algunos medios, poco antes de tales **episodios de violencia**, el viceprimer ministro y ministro de Defensa, Phumtham Wechayachai, habría **rechazado las demandas del BRN** para un alto el fuego durante el Ramadán –como la liberación de prisioneros del grupo, la reducción del número de días de tregua a 15, el nombramiento de un equipo de expertos internacionales para supervisar la tregua y la autorización a que ONG locales participaran en dicha iniciativa. Además, el BRN habría trasladado a Bangkok que la resolución del

conflicto, incluido un alto el fuego en Ramadán, debería discutirse con un nuevo jefe negociador del gobierno, que el Gobierno tailandés aún no ha designado. La última ronda de conversaciones de paz entre ambas partes tuvo lugar en febrero de 2024, y desde que el primer ministro Paetongtarn Shinawatra asumió el cargo en agosto pasado no ha habido indicios de reanudación de las conversaciones de paz.

Tras los ataques del BRN en marzo, Phumtham Wechayachai declaró que el nuevo jefe negociador **no sería designado hasta que el grupo demostrara su voluntad de reducir los niveles de violencia en la región**. Phumtham Wechayachai también cuestionó la autoridad y legitimidad del panel negociador para hablar en nombre del BRN y

anticipó la participación de otros grupos en el diálogo – sin especificar el nombre o la naturaleza de los mismo. Según fuentes gubernamentales, Phumtham también estaría considerando eliminar toda mediación extraoficial –en concreto el rol de observación del diálogo de cinco personas expertas en resolución de conflictos de distintas nacionalidades. En línea con el cuestionamiento del Gobierno al diálogo político como estrategia de resolución del conflicto, algunos análisis consideran que **Bangkok está valorando si dar continuidad o no al Plan Integral Conjunto para la Paz (JCPP)**, una hoja de ruta en la que sucesivos gobiernos y el BRN habían estado discutiendo y elaborando en los últimos tres años, y que tendría tres aspectos fundamentales: reducción de la violencia, consulta pública y una solución política al conflicto.

EUROPA

ARMENIA – AZERBAIYÁN: Ereván y Bakú pactan un acuerdo de paz, pendiente de firma y en un contexto de desconfianza y tensión

RUSIA – UCRANIA: Acuerdo de alto el fuego en el sector energético y el Mar Negro, pero persisten las hostilidades de alta intensidad

TÜRKIYE: Continúa entre obstáculos la iniciativa de paz con el PKK, pero el contexto político en el país se deteriora

ARMENIA – AZERBAIYÁN

Ereván y Bakú pactan un acuerdo de paz, pendiente de firma y en un contexto de desconfianza y tensión

Los Gobiernos de Armenia y Azerbaiyán pactan el texto final de un acuerdo de paz entre las partes, según informó Bakú y confirmó posteriormente Ereván. El acuerdo, de 17 artículos y logrado en su 12º borrador, ha sido posible tras la aceptación final por Armenia de dos puntos en que aún había disenso (compromiso mutuo de retirar y descartar demandas legales ante tribunales internacionales, por una parte; y de no desplegar fuerzas de terceras partes en la frontera común, por otra). Tras el anuncio, Armenia expresó disposición a fijar fecha y lugar para la firma del acuerdo de paz, mientras que Azerbaiyán expuso dos demandas más previas a la ratificación. Son exigencias ya expuestas en meses anteriores y que incluyen, por una parte, cambios en la Constitución de Armenia en tanto Bakú considera que la Carta Magna armenia contiene aspiraciones territoriales sobre Azerbaiyán; y, por otra parte, la reclamación de disolución del Grupo de Minsk de la OSCE, estructura copresidida por EEUU, Rusia y Francia y bajo el paraguas de la OSCE y que históricamente medió en las negociaciones entre las partes.

El anuncio de un acuerdo de paz supone avances y oportunidades, pero también contiene limitaciones significativas. Respecto a los avances y oportunidades, las partes llegan a un acuerdo tras algo más de un año

de negociaciones sobre los borradores del pacto y tras un largo recorrido de conflictos armados (1998-1994, 2020, ofensiva militar de 2023) y tensión bilateral. El acuerdo abre la posibilidad de desescalada de tensión militar y no excluye que elementos en disputa que no han entrado por desacuerdos sigan negociándose en paralelo y en fases posteriores, como la interconexiones y rutas de transporte y comerciales. No obstante, el anuncio de pacto va acompañado de limitaciones y elementos de riesgo. Por una parte, **como señalan algunos análisis**, es un acuerdo sobre normalización de relaciones interestatales y no integra aspectos relacionados con construcción de paz al nivel de las respectivas sociedades, como el retorno de las poblaciones desplazadas y justicia y reconciliación. Por otro lado, esa normalización de relaciones entierra definitivamente la cuestión del estatus de Nagorno-Karabaj y de los derechos de su población armenia, causa de la disputa entre las partes.

Existen otros elementos de riesgo e incertidumbre. Analistas han señalado que el **resultado es ambiguo** y que la precondition de la reforma de la Constitución de Armenia presenta retos complejos al requerir un referéndum y ser un proceso político sensible. Desde el cambio de poder en 2018 **el Gobierno aspiraba a introducir modificaciones constitucionales**, aparcadas por la pandemia, el conflicto con Azerbaiyán y las elecciones anticipadas, pero la precondition de Azerbaiyán complica el proceso al proyectar una exigencia externa sobre la dinámica de política interna. En mayo de 2024 el primer ministro armenio emitió un decreto instando a la

preparación de una nueva Constitución para diciembre 2026 y en agosto el Gobierno anunció planes para un referéndum constitucional en 2027. Ahora el primer ministro armenio, Nikol Pashinián, ha sugerido que **la consulta podría tener lugar en 2026**, coincidiendo con las elecciones parlamentarias. Pashinián insiste en que la reforma constitucional pertenece al ámbito exclusivamente interno, pero admite que tiene impacto regional e internacional. En un contexto de críticas internas que cuestionan la exigencia de Azerbaiyán, está por ver cómo se desarrollará este proceso y cómo su cronograma y dinámicas afectarán y se verán afectadas por las negociaciones con el país vecino. En contraste, algunos análisis interpretan la precondition de disolución del Grupo de Minsk de la OSCE como una **medida más simbólica**, en tanto esa estructura ya estaba inoperativa.

Por otra parte, el anuncio de acuerdo llega en un contexto de tensión política y elevado recelo entre ambos gobiernos. El propio **presidente azerbaiyano, Ilham Alíyev**, el día del anuncio señaló que su nivel de confianza hacia Armenia era “cercano a cero”. Además, se han incrementado las acusaciones de Azerbaiyán a Armenia de violaciones del alto el fuego, rechazadas por las autoridades armenias, que han solicitado sin respuesta datos sobre esas alegaciones. En ese sentido, el punto incluido en el acuerdo sobre la retirada de misiones de terceras partes de la frontera requerirá el repliegue de la misión civil de observación de la UE en Armenia (EUMA), al menos de las áreas junto a la frontera. Aun si el acuerdo de paz contempla medidas de construcción de confianza –según señaló el propio Pashinian–, en ausencia de mecanismos claros de prevención y abordaje de incidentes y de verificación del alto el fuego, la situación en la frontera puede seguir siendo foco de tensión e incrementarse. Además, queda pendiente de alcanzarse un acuerdo sobre la cuestión de las interconexiones y rutas de transporte y comerciales, incluyendo el llamado “corredor de Zangezur” para comunicar Azerbaiyán con el enclave azerbaiyano de Najicheván a través de la provincia armenia de Syunik. En diversas ocasiones Azerbaiyán ha amenazado con el uso de la fuerza militar para implementar ese corredor.

RUSIA – UCRANIA

Acuerdo de alto el fuego en el sector energético y el Mar Negro, pero persisten las hostilidades de alta intensidad

EEUU, Rusia y Ucrania alcanzan un acuerdo de alto el fuego en el ámbito de infraestructuras energéticas y otro en el Mar Negro, pero sin claridad sobre sus términos y mecanismos de observación. Pese al pacto, del 25 de marzo, Rusia y Ucrania se han acusado de violaciones en el ámbito energético. Más allá de esos ceses de hostilidades, la violencia de alta intensidad ha continuado en las líneas del frente militar y en forma de bombardeos rusos contra otras infraestructuras civiles. Según OCHA, entre enero y febrero al menos 217 civiles murieron y otros 1.328 resultaron heridos, principalmente en las provincias de

Donetsk y Jersón, y cientos de miles de personas se vieron afectadas en Ucrania por interrupciones en el acceso a calefacción, gas y agua y otros servicios básicos a causa de bombardeos rusos.

Los altos el fuego en energía y el Mar Negro fueron anunciados en comunicados diferentes de EEUU (uno **relativo a Rusia y otro a Ucrania**), de **Rusia** y de **Ucrania**, tras tres días (23-25 de marzo) de negociaciones por separado en Arabia Saudita, con mediación de EEUU. En cambio, no fue posible el acuerdo trilateral sobre un cese de hostilidades más amplio. En negociaciones previas entre las delegaciones estadounidense y ucraniana en Arabia Saudita, Ucrania había aceptado **el 11 de marzo una propuesta de EEUU** de un alto el fuego de 30 días en tierra, mar y aire. Su aceptación llegaba en un contexto de dificultades para Ucrania tras la ofensiva diplomática coercitiva de EEUU sobre Ucrania y la suspensión de la ayuda militar y de inteligencia. Por su parte, Rusia rechazó esa tregua global temporal y exigió condiciones; y, en llamada telefónica el 18 de marzo, los presidentes de EEUU y Rusia acordaron una tregua parcial, en torno a la cual los comunicados de cada parte daban lugar a interpretaciones diferentes (“infraestructura de energía” **según Rusia**, e “infraestructura y energía” **según EEUU**). Las negociaciones técnicas del 23-25 de marzo, por separado entre EEUU y Ucrania y entre EEUU y Rusia, daban continuidad a esas negociaciones previas y resultaron en los mencionados pactos de alto el fuego en energía y en el Mar Negro. Este segundo tiene el objetivo de “garantizar la navegación segura, eliminar el uso de la fuerza e impedir el uso de buques comerciales para fines militares en el Mar Negro”, según todas las partes. Se trata de los primeros acuerdos desde la finalización del pacto de la Iniciativa del Mar Negro en julio de 2023, sin contar los acuerdos ad hoc de liberación de prisioneros, intercambio de soldados fallecidos y retorno de menores.

No obstante, el alto el fuego en energía y en el Mar Negro anunciados el 25 de marzo contenían ambigüedad y falta de concreción sobre aspectos significativos, incluyendo sobre su alcance, entrada en vigor, duración y observación/verificación. Rusia señaló que el pacto sobre el Mar Negro no entraría en vigor hasta se cumplieran ciertas condiciones, incluyendo la reconexión del principal banco agrario de Rusia, Rojsseljosbank, al sistema SWIFT de pagos internacionales, paso que requeriría el acuerdo y apoyo de los países de la UE. Pese a esas condiciones, para Ucrania el alto el fuego sobre el Mar Negro entraba en vigor el mismo 25 de marzo. La Comisión Europea anunció el 26 de marzo que rechazaba levantar las sanciones al banco Rojsseljosbank. EEUU señaló que estudiaría las demandas rusas. Por otra parte, Ucrania facilitó a EEUU un listado adicional de infraestructura estratégica que considera debería ser protegida en el marco del alto el fuego en energía, pero no había menciones a ese listado adicional en los anuncios de EEUU y Rusia, de acuerdo con el **análisis del ISW del 25 de marzo**. Según señaló el **ISW el 30 de marzo**, las partes seguían negociando las condiciones relativas al alto el fuego sobre infraestructura energética y los resultados aún no eran claros. Asimismo,

no trascendió acuerdo sobre mecanismos de verificación y observación. Según el presidente ucraniano, las tareas de **supervisión del alto el fuego marítimo** las podrían llevar a cabo países como EEUU, Reino Unido, Francia, Türkiye, Bulgaria y Rumanía, pero está por ver si las negociaciones lograrán acuerdos al respecto.

Por otra parte, Rusia siguió presionando contra la legitimidad del Gobierno y Presidencia de Ucrania – elegidos democráticamente en elecciones en 2019 y con comicios postergados desde 2024 en el marco de la ley marcial, con amparo constitucional. Moscú propuso en marzo el establecimiento de un **gobierno interino en Ucrania** bajo supervisión de la ONU, elecciones posteriores y traspaso de poder a un nuevo gobierno, con el que Rusia negociaría y podría negociar y firmar un acuerdo de paz. **EEUU amenazó a Rusia con aranceles** al petróleo en caso de dilatar las negociaciones de paz. En paralelo, el presidente estadounidense incrementó su presión sobre Ucrania para aceptar un acuerdo sobre **explotación de recursos naturales** –con términos diferentes a los del acuerdo inicial y más favorables a EEUU–, advirtiendo de “grandes problemas” si Ucrania no lo aceptaba. En ámbito europeo, la Comisión Europea intensificó su estrategia de rearme y militarismo frente a Rusia, con el lanzamiento en marzo del plan **ReArm Europe**, el **Libro Blanco de la Defensa** y la **Estrategia de Preparación**, que no incluyen el fortalecimiento de capacidades de diálogo y mediación o potenciales medidas de construcción de confianza y seguridad (CSBM).

TÜRKIYE

Continúa entre obstáculos la iniciativa de paz con el PKK, pero el contexto político en el país se deteriora

La iniciativa de diálogo entre Türkiye y el grupo armado kurdo PKK, **iniciada en 2024**, avanzó en los últimos meses, con nuevas consultas entre partidos políticos y un llamamiento histórico del líder del PKK, Abdullah Öcalan, al fin de la lucha armada, respondido positivamente por el grupo a través de la declaración de un alto el fuego unilateral. No obstante, la iniciativa de paz afronta diversos obstáculos, como la falta de un marco estructurado de negociación entre las partes, a los que se añade el deterioro del contexto político en el conjunto de Türkiye. La detención el 19 de marzo del **alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu**, del principal partido opositor turco, Partido Republicano del Pueblo (CHP) desencadenó una grave crisis política y social, con represión mediante **uso indiscriminado de la fuerza** y **numerosas detenciones** por las fuerzas de seguridad contra las masivas protestas en diversas provincias del país, con cientos de miles de personas en las calles. Se trata de las mayores protestas en el país desde las movilizaciones de Gezi en 2013. El CHP consideró la detención como un “golpe” contra la oposición con el objetivo de impedir que Imamoglu dispute la presidencia a Erdogan en las próximas elecciones.

Respecto a la iniciativa de diálogo, el **llamamiento de Abdullah Öcalan** se hizo público el 27 de febrero, en un mensaje leído por la delegación del prokurdo Partido de la Igualdad y la Democracia (DEM), formación involucrada en los meses previos en la interlocución con el líder del grupo armado y en consultas entre el propio DEM y los partidos políticos con representación parlamentaria. En su mensaje, Öcalan instó al PKK a convocar un congreso, deponer las armas y disolverse. La delegación del DEM leyó una nota adicional de Öcalan en la que afirmaba que la renuncia a las armas y la disolución del PKK requieren de un marco legal y del reconocimiento de políticas democráticas.

El llamamiento se produjo tras una nueva reunión ese mismo día con Öcalan de una delegación del DEM –con ocho hombres y dos mujeres, delegación ampliada con respecto a anteriores visitas. Era la tercera visita en el marco de la iniciativa de paz. **El PKK respondió con un comunicado** en el que declararon un alto el fuego unilateral (en vigor desde el 1 de marzo, día del comunicado), respaldaron en su totalidad el mensaje de Öcalan y anunciaron que lo implementarán. No obstante, enunciaron demandas, incluyendo políticas democráticas y bases jurídicas (en aparente referencia a respaldo legal para el proceso de paz y para los pasos como disolución y desarme); condiciones de seguridad para la celebración de un congreso y que pueda dirigirlo personalmente Öcalan; y condiciones de libertad física para Öcalan. El **presidente de Turquía** dio la bienvenida al alto el fuego, pero advirtió de que el PKK debía desarmarse y que si era necesario mantendrían las operaciones militares hasta eliminar al grupo. Con posterioridad al llamamiento de Öcalan, el DEM mantuvo una nueva ronda de reuniones con los partidos políticos parlamentarios, incluyendo con el gubernamental AKP el 11 de marzo, en la que el DEM reclamó un canal de comunicación directa con Öcalan. Se produjeron también algunos **gestos de construcción de confianza** entre el MHP y el DEM, reuniones entre mujeres representantes políticas de los partidos, y una **nueva visita familiar a Öcalan**.

No obstante, se pusieron de manifiesto obstáculos y dificultades. Dirigentes del PKK como **Duran Kalkan** reclamaron en marzo al Gobierno de Türkiye pasos y avances concretos. Según Kalkan, pese a discusiones sobre las condiciones de prisión de Öcalan y sobre la creación de reformas legales, no se han dado pasos al respecto. El **Ministro de Defensa, Yasar Guler**, insistió en que el PKK debían deponer las armas sin condiciones y disolverse. Türkiye mantuvo su presión militar sobre el grupo y milicias vinculadas. Según fuentes del Ministerio de Defensa de Türkiye recogidas en AI-Monitor, entre el 3 y 7 de marzo, el Ejército turco mató a 26 combatientes kurdos en Iraq y Siria. **ACLED** contabilizó 316 eventos de violencia organizada por parte del Ejército de Türkiye en Iraq (303 explosiones/violencia remota y 13 batallas) entre el 1 de marzo y el 28 de marzo. Además, en las rondas del DEM con partidos políticos se puso de manifiesto las carencias en relación a canales de comunicación y hoja de ruta, entre otras.

Por otra parte, el llamamiento de Öcalan del 27 de febrero no hizo referencia explícita a las milicias kurdas de siria YPG/YPJ. Türkiye ha insistido reiteradamente en que tanto el PKK como las YPG/YPJ –a las que considera PKK con otras siglas– deben desarmarse y disolverse incondicionalmente. El comandante general de las YPG, Mazloum Abdi, saludó el mensaje de Öcalan pero rechazó que involucrase a las milicias kurdas del noreste de Siria.

Abdi y el presidente interino de Siria, Ahmad al-Sharaa, firmaron un acuerdo de ocho puntos el 10 marzo y que habría contado con luz verde de Türkiye. No obstante, Ankara lanzó nuevos ataques en el noreste de Siria con posterioridad al acuerdo. Representantes del DEM calificaron un ataque de Türkiye con un dron en Kobane (Siria) que causó nueve víctimas civiles como un intento de **torpedear los esfuerzos de paz**.

ORIENTE MEDIO

ISRAEL – SIRIA: Israel intensifica sus operaciones militares y la ocupación de territorios en Siria

YEMEN: Ataques de EEUU causan decenas de muertes e indican un cambio de estrategia hacia los al-houthistas e Irán

ISRAEL – SIRIA

Israel intensifica sus operaciones militares y la ocupación de territorios en Siria

Tras el derrocamiento de Bashar al-Assad y después de lanzar más de 500 ataques en Siria en diciembre de 2024 –que destruyeron la mayor parte de sus capacidades navales, aéreas e infraestructuras de producción de armas–, el Gobierno de Benjamin Netanyahu intensificó sus operaciones militares y la ocupación de territorio sirio. Bajo el argumento de riesgos de seguridad, las fuerzas israelíes (IDF) se instalaron en la zona de separación establecida hace medio siglo en los Altos del Golán –en el acuerdo que puso fin a la guerra del Yom Kippur en 1974– y penetraron más allá en territorio sirio. Netanyahu había anunciado en diciembre que el acuerdo entre Siria e Israel había “colapsado” y que había dispuesto el despliegue de fuerzas israelíes en la zona para prevenir que fuera controlada por grupos hostiles. Aunque inicialmente las autoridades israelíes habían indicado que su presencia en el área sería temporal, declaraciones y hechos posteriores confirmaron la previsión de múltiples analistas y observadores: que la intención de Israel es mantenerse sus fuerzas en esta zona a largo plazo o incluso indefinidamente. A finales de enero el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, aseveró que las IDF se mantendrían en la zona de separación “**por un tiempo ilimitado**”. El alto cargo israelí hizo estas declaraciones desde el Monte Hermón, una parte del cual está ocupado por Israel desde la guerra árabe-israelí de 1967 y otra invadida en diciembre. Katz aseguró que las IDF permanecerían en esta estratégica área –ubicada a 40 kilómetros de Damasco, que permite la vigilancia de la capital siria, del paso fronterizo de Masnaa y de la zona del sur de Líbano con mayor presencia de Hezbollah– y en otros puntos de la zona de separación. Informaciones de prensa alertaron que **Israel había construido varias bases militares** –al menos siete– en la zona desmilitarizada en los primeros meses de 2025 y también recogieron testimonios

de residentes que denunciaron desplazamientos de población, impedimentos de las IDF para regresar a sus hogares, represión de las manifestaciones contra la presencia israelí y preocupación de la población local por el acceso a la presa de Mantara, una fuente de agua vital en la región. A estos hechos se suma que, pocos días después del derrocamiento de al-Assad, el Gobierno de Netanyahu aprobó duplicar la población israelí en los Altos del Golán ocupados –cabe recordar que Israel se anexionó este territorio en la década de los 80 del siglo pasado en una medida que no ha sido reconocida por la comunidad internacional.

En este contexto, a finales de febrero, Netanyahu fue un paso más allá en las ambiciones de Israel y **exigió la desmilitarización del sur de Siria**. También advirtió explícitamente que Israel no permitiría la presencia de Hayat al-Sham (HTS) –el grupo que lideró el derrocamiento de al-Assad y que ahora encabeza la transición– ni de otras fuerzas sirias en el área sur de Damasco. En paralelo, las fuerzas israelíes continuaron lanzando diversos ataques en Siria. Hasta finales de marzo, el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos (SOHR, por sus siglas en inglés) había documentado **al menos 40 ataques israelíes** –34 ofensivas aéreas y seis con cohetes por parte de fuerzas terrestres– contra posiciones militares e instalaciones estratégicas que dejaron al menos 20 personas muertas (13 civiles) y otras 13 heridas en Aleppo, Rif Dimashq, Al-Suwaitdaa, Homs, Quneitra, Deraa, Tartous, Damasco y Latakia. Otras fuentes contabilizaron **más de 70 ataques israelíes** en territorio sirio desde mediados de febrero. El primer ataque israelí contra las nuevas autoridades sirias se produjo en Quneitra, en enero, y en él murieron al menos dos combatientes de HTS. A finales de marzo, SOHR y otras fuentes alertaban que las IDF continuaban avanzando posiciones en la provincia siria de Quneitra y que se habían producido varias muertes en enfrentamientos que intentaban frenar a las IDF en el oeste de Deraa. En marzo Israel también atacó el aeropuerto militar de Palmira y una base aérea cercana en una acción que enmarcó en su campaña para destruir armas y material

militar abandonado por el régimen de al-Assad y asegurar que no caerán en manos de fuerzas hostiles a Israel. Ante estos desarrollos, el líder de HTS y presidente interino de Siria, Ahmed al-Sharaa insistió en enero que su país seguía comprometido con el acuerdo suscrito con Israel en 1974 y que esperaba que las fuerzas de la ONU responsables de observar su implementación, la UNDOF, restaurara las condiciones previas a las acciones israelíes. Previamente, en diciembre, al-Sharaa había explicitado que la nueva administración no busca una confrontación con Israel y que sin presencia de Irán y Hezbollah en el país ya no había excusas para más ofensivas. Ante la persistencia de los ataques y la penetración israelí en territorio sirio, a finales de febrero la Conferencia de Diálogo Nacional de Siria denunció estas acciones como una **violación flagrante de la soberanía del país**. En su declaración final abordó específicamente este tema y exigió el retiro incondicional de Israel, rechazó los posicionamientos de Netanyahu y llamó a la comunidad internacional a asumir sus responsabilidades para poner fin a la agresión.

Durante el trimestre, el enviado especial de la ONU para Siria, Geir Pedersen, insistió en que **la incursión israelí en Siria era inaceptable**. En diciembre el Consejo de Seguridad de la ONU había renovado el mandato de la UNDOF por un nuevo período de seis meses y, en marzo, aprobó una declaración presidencial en la que se instó a todos los Estados a respetar la soberanía, independencia e integridad territorial de Siria, aunque sin aludir explícitamente al acuerdo de separación de fuerzas de 1974 entre Israel y Siria. En una declaración hecha pública a mediados de diciembre, la UNDOF había calificado las acciones y presencia israelí en diversas localidades de los Altos del Golán como una violación al acuerdo de 1974 y subrayado que los movimientos de Israel dentro del área de separación a lo largo de la línea de cese el fuego venían intensificándose desde julio de 2024. Durante el trimestre, analistas también subrayaron que las incursiones israelíes en Siria constituían **severas vulneraciones al derecho internacional**, no solo por capturar y retener territorios ilegalmente, sino también por usar la fuerza en Siria contra objetivos que no suponían una amenaza directa para Israel. La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, alertó en marzo a Israel sobre el **riesgo de escalada** y manifestó que la UE consideraba innecesarias sus ofensivas debido a que Siria no estaba atacando a Israel. Cabe destacar que el gobierno de Netanyahu ha intentado justificar sus acciones no solo en la seguridad de Israel, sino también en la protección de minorías en Siria y la región, en particular la drusa. Con esta aproximación –que no es única de Israel, otros actores regionales e internacionales como Irán y Rusia también han intentado instrumentalizar la diversidad confesional y étnica en Siria y promover divisiones para avanzar sus propias agendas–, el Gobierno israelí pretendería reforzar los lazos con la minoría drusa con ciudadanía israelí, que participa en las IDF y en la policía israelí. Esta justificación, sin embargo, ha contado con el **rechazo de las comunidades drusas de Siria**, que mayoritariamente se han manifestado contrarias a la idea de “protección” que pretende proyectar Israel. Pese a



Patrullas de la UNDOF. Fuente: UNDOF

ello, también se han producido hechos inusuales, como la **primera visita de líderes drusos en más de cinco décadas** a comunidades drusas ubicadas en los Altos del Golán ocupados por Israel. Otros análisis han subrayado que **la estrategia de Israel en Siria también pretende mantener un Estado débil militarmente y limitar la influencia de Türkiye**. Con este propósito, el Gobierno de Netanyahu estaría presionando a EEUU para que bloquee los intentos turcos por establecer bases en Siria y, por el contrario, permita el mantenimiento de bases rusas que actúen como contrapeso para las ambiciones de Ankara.

YEMEN

Ataques de EEUU causan decenas de muertes e indican un cambio de estrategia hacia los al-houthistas e Irán

El Gobierno de EEUU lanza una serie de ataques aéreos en Yemen contra posiciones al-houthistas a mediados de marzo que causan la **muerte a más de cincuenta personas** y heridas a un centenar. Este balance superó así a todas las muertes provocadas por los ataques de Washington y Londres en el marco de su campaña contra los al-houthistas desde el inicio de la crisis en el Mar Rojo y el despliegue de la operación militar conjunta a principios de 2024 (34 muertes, según ACLED). La ofensiva constituyó la primera intervención de este tipo en Oriente Medio desde que Donald Trump asumió el poder en enero y fue descrita por autoridades militares estadounidenses como **el comienzo de una operación de mayor escala en Yemen**. La ofensiva, que alcanzó objetivos en siete provincias de Yemen, fue interpretada como un castigo al grupo yemení por sus ataques en el Mar Rojo, que los al-houthistas han reivindicado en el marco de su solidaridad con Gaza y Hamas. Fuentes del Pentágono aseguraron que desde octubre de 2023 los al-houthistas habían atacado barcos de guerra de EEUU en 174 ocasiones, además de lanzar 145 ofensivas contra naves comerciales. Ya en enero la administración Trump los había declarado como organización terrorista extranjera (FTO, por sus siglas en inglés), recuperando así la designación que habían recibido durante su primer mandato y que había sido revertida por el Gobierno de Joe Biden.

Los ataques pretenderían **degradar las capacidades de los al-houthistas** para lanzar ofensivas en una ruta marítima estratégica y vital para el comercio mundial y, buscarían afectar directamente al liderazgo houthi. Análisis destacaron que la operación estadounidense aparentemente es **más extensa que la que desplegada durante el mandato de Biden** y ha pasado de focalizarse en infraestructuras de lanzamiento de cohetes a atacar altos cargos del grupo yemení y bombardear ciudades. La ofensiva de EEUU también pretendería enviar una advertencia a Irán, al que Trump considera responsable por suministrar armas al grupo yemení. En un mensaje en sus redes sociales tras el primer ataque, el mandatario estadounidense exigió a Teherán que suspendiera inmediatamente su apoyo a los al-houthistas, que forman parte del denominado “eje de la resistencia” bajo la órbita de Irán en Oriente Medio. La ofensiva se produce en un momento en que EEUU ha intensificado las sanciones contra Teherán y las presiones por su programa nuclear.

Los al-houthistas habían condicionado la suspensión de sus operaciones en el Mar Rojo y contra Israel al fin de los ataques israelíes en Gaza y el levantamiento del bloqueo al territorio palestino. Tras el anuncio de alto el fuego entre

Hamas e Israel en enero (véase el tema destacado sobre Israel-Palestina), **los al-houthistas cesaron sus ataques y decidieron liberar a la tripulación de la nave MV Galaxy Leader**, que habían capturado en noviembre de 2023. La escalada de EEUU en Yemen se produjo después de que los al-houthistas anunciaran que reanudarían sus ataques contra embarcaciones de Israel, tras la decisión del Gobierno de Benjamin Netanyahu a principios de marzo de reimponer el bloqueo a la entrada de ayuda humanitaria a Gaza. La ruptura del alto el fuego por Israel en Gaza amenazaba con incrementar la inestabilidad también a nivel regional y las posibilidades de que se intensifiquen los intercambios de fuego en el Mar Rojo. A finales de marzo, nuevos ataques en Yemen contra posiciones al-houthistas atribuidos a EEUU causaron nuevas muertes, elevando a 61 el número de víctimas mortales tras el inicio de la ofensiva del Gobierno de Trump. Cabe destacar que la operación estadounidense en Yemen fue objeto de una intensa polémica en EEUU por un **extraordinario fallo de seguridad**, después de que los planes y detalles presuntamente clasificados del ataque a los al-houthistas fueran comentados por altos funcionarios del equipo de Trump en un chat de Signal en el que, además, se incluyó a un periodista.



Esta publicación está sujeta a una licencia de Creative Commons. Se permite la reproducción total o parcial, la distribución y la comunicación pública de la obra, siempre que no sea con fines comerciales, y siempre que se reconozca la autoría de la obra original. No se permite la creación de obras derivadas.

El contenido de esta publicación es responsabilidad exclusiva de la Escola de Cultura de Pau y no refleja la opinión de la ACCD ni de la Generalitat de Catalunya.

èçp̧ escola de
cultura de pau

UAB
Universitat Autònoma
de Barcelona

Escola de Cultura de Pau
Edifici B13, Carrer de Vila Puig,
Universitat Autònoma de Barcelona 08193
Bellaterra (Espanya)
Tel: +34 93 581 14 14
pr.conflict.escolapau@uab.cat
escolapau.uab.cat

Con el apoyo de:



**Generalitat
de Catalunya**

@escolapau



@escolapau.bsky.social



EscolaPau



escoladeculturadepau

